

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia  
JUZGADO : 1° Juzgado de Letras de Punta Arenas  
CAUSA ROL : C-1810-2022  
CARATULADO : FERRER/FISCO DE CHILE- CDE

Punta Arenas, siete de diciembre de dos mil veintitrés

**VISTOS.**

Con fecha 9 de noviembre de 2022, folio 1, compareció don PABLO ANDRÉS BUSSENIUS CORNEJO, cédula de identidad N° 12.253.804-4, abogado, en representación de **ALEJANDRO CONSTANTINO FERRER FERNANDEZ**, chileno, casado, jubilado, cédula nacional de identidad N° 5.068.148-3, ambos domiciliados para estos efectos en calle Lautaro Navarro 1066, Oficina 403, comuna y ciudad de Punta Arenas, e interpuso **demanda ordinaria en juicio de hacienda de indemnización de los perjuicios** en contra del **FISCO DE CHILE**, persona jurídica de derecho público, RUT N° 61.006.000-5, representado para estos efectos por el Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado, don CLAUDIO PATRICIO BENAVIDES CASTILLO, abogado, cédula de identidad N° 8.379.257-4, ambos con domicilio en 21 de mayo 1678, Punta Arenas, o quien legalmente lo subroque, a fin que se declare el derecho de su representado, en su calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, a percibir indemnización de perjuicios y, por ende, se condene a la demandada a resarcir los daños morales ocasionados en virtud de los actos ilegales en que incurrió la Administración del Estado, atendidas las siguientes consideraciones de hecho y de derecho.

Señaló que el día 11 de septiembre de 1973, representa un día negro en la historia de nuestro país, no sólo por el violento quiebre institucional que culminó con el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Salvador Allende, sino que además porque



cambió drástica y dramáticamente la vida de cientos de miles de chilenos. Agrega que ese día supuso un antes y un después; fue el inicio de las ejecuciones, las desapariciones, la prisión política, la tortura, la persecución, la represión, la censura, el exilio y la diáspora, en definitiva, fue el momento del miedo.

Dijo que a partir de ese día se instaura en Chile el terrorismo de Estado, en el que las gravísimas violaciones a los derechos humanos son perpetradas por agentes del propio Estado, amparados bajo un manto de impunidad forjado con recursos estatales. La actuación del Estado o sus agentes que en forma injusta y arbitraria violentan las normas y la confianza que los ciudadanos depositan en los órganos públicos, los cuales en esencia están llamados precisamente a protegerlos, brindarles seguridad para el ejercicio de sus derechos y la satisfacción de sus legítimos intereses.

Indica que el cruento balance de la dictadura cívico militar que transcurrió desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el mes de marzo de 1990 arroja, de acuerdo con las comisiones de verdad, 1.183 personas desaparecidas, otras 2.008 ejecutadas y al menos 35.868 personas torturadas, cifras que en ningún caso son cerradas, puesto que progresivamente se han incorporado nuevas víctimas que en un principio no se les calificó como tales. En ese contexto de graves violaciones a los Derechos Humanos, Magallanes y sus habitantes no tenían por qué ser la excepción.

#### a. RELATO DE LA VÍCTIMA

Señaló que el siguiente corresponde al relato de lo vivido por el demandante con ocasión de la traumática experiencia derivada de los actos realizados por el Estado y sus agentes durante la dictadura en Magallanes:

*"Soy chileno, nacido en Punta Arenas el 28 de septiembre de 1945.*



Provengo de una familia de inmigrantes españoles que sentían un profundo respeto y admiración por Chile y su democracia, valores que nuestros padres nos inculcaron de niños, tanto a mi hermano (en la actualidad fallecido), cómo a mí.

A la edad de 17 años ingresé al Partido Socialista, y diez años después, en agosto 1973, fui elegido miembro de la Comisión Política del Partido Socialista de Magallanes.

En 1966, me casé con Gladys Ulloa Bontes en Puerto Natales y tuvimos tres hijos: Marcelo Ferrer Ulloa, nacido el 8 de agosto de 1967; Alejandra Ferrer Ulloa, nacida el 6 de enero de 1970; y Fernando Ferrer Ulloa, nacido el 22 de septiembre de 1973, o sea, 11 días después del golpe cívico-militar. De hecho, fui el primer "prisionero de guerra" en ser padre en el Regimiento Pudeto y me permitieron conocer a mi hijo dos meses después de su nacimiento, durante 10 minutos y en una oficina del Regimiento.

En tiempos del gobierno del Presidente Salvador Allende, la Corporación de Magallanes (CORMAG) me nombró Vice-Presidente Ejecutivo de la Empresa Magallánica de Turismo (EMATUR), responsabilidad que significó reorganizar las hosterías diseminadas por toda la provincia, incluyendo Punta Arenas, Puerto Natales, Puerto Bories, Cerro Guido, Porvenir y Puerto Williams; además de organizar el Festival Folclórico en la Patagonia; administrar La Casa del Deportista, y el Andarivel del Cerro Mirador; sin perder de vista las políticas de mejoramiento del turismo extranjero y, definitivamente, el turismo popular, para lo cual hicimos convenios con la Central Única de Trabajadores (CUT).

El 11 de septiembre de 1973, a las seis (6) de la tarde, fui detenido por Carabineros de Puerto Natales, en la Hostería El Cisne de Cuello Negro, Puerto Bories,



y trasladado al día siguiente al Regimiento Pudeto de Punta Arenas, donde recibí un trato de "prisionero de guerra", en una guerra que realmente "jamás existió".

El día 28 de septiembre de 1973 fui conducido a un siniestro edificio ubicado en la Avenida Colón, conocido como "El palacio de la risa", donde durante más de cuatro horas sufrí todo tipo vejámenes y torturas, que incluyeron la aplicación de electricidad en los genitales, la lengua, y en todo el cuerpo, mientras permanecí amarrado a una cama metálica. Esa noche regresé a medianoche en estado calamitoso al gimnasio del Pudeto, con instrucciones estrictas de no tomar agua hasta el día siguiente.

En el mes de noviembre o diciembre, volví a ser torturado por segunda vez en el "Palacio de la Risa". Allí fuimos llevados todos los prisioneros del Regimiento Pudeto en orden alfabético. En mi caso, después de aplicarme electricidad en las manos, me sentaron en una silla y cuando menos lo esperaba, me dieron una patada en la axila derecha con tal violencia que literalmente me hicieron volar con silla y todo, afectando mi espalda por varios días, en medio de carcajadas y celebraciones de aquellos individuos.

Después de esto, al cabo de un par de semanas fui enviado, junto a cientos de prisioneros del Regimiento Pudeto y de otros centros de detención, a la Isla Dawson, donde permanecí hasta el día diez (10) de enero de 1974. En aquel campo de concentración, dejé de ser Alejandro Ferrer y me transformaron en "Charlie 50", debido a que el nombre de mi barraca era Charlie.

Durante gran parte del año 1974 quedé en libertad vigilada, sin autorización para salir de Punta Arenas, con firma diaria al comienzo y más adelante con firma semanal. A fines de 1974 fui detenido nuevamente, y enviado a la cárcel pública de Punta Arenas a la espera del Segundo Consejo de Guerra en Magallanes contra el



*Partido Socialista, que se realizó en el Regimiento Pudeto.*

*Por ser miembro de la Comisión Política del Partido Socialista de Magallanes, fui condenado a una pena de cinco años de relegación en la ciudad de Quellón, Chiloé, y posteriormente se cambió a la ciudad de Castro.*

*Después de haber cumplido dos años de relegación, con frecuentes visitas nocturnas por parte de carabineros, que nos afectaban física y psicológicamente, tanto a mi esposa como a mí, pero por sobre todo a nuestros tres hijos: Marcelo de 9 años, Alejandra de 7 años y Fernando de 3 años, no nos quedó otra opción que conmutar la pena de relegación por la de extrañamiento.*

*Salimos al exilio a Estados Unidos a fines del año 1976. Esta salida significó un cambio radical en la vida de mi familia y la mía propia. De Vicepresidente de la empresa de turismo, quizás más importante de Chile para el desarrollo del turismo, pasé a trabajar como empleado de limpieza en un Instituto Teológico que funciona (hasta la fecha) en la Universidad de Northwestern en Evanston, suburbio de Chicago. Tarea que creo haber cumplido con dignidad y agradecimiento y que definitivamente considero una gran lección de humildad en mi vida, cosa que me incentivó a esforzarme en el trabajo y en el estudio.*

*Trabajé durante el turno nocturno, de 4 a 12 de la noche por cuatro años, mientras estudiaba durante el día hasta lograr mi título de profesor bilingüe-bicultural; y posteriormente para obtener el grado de Magíster en Artes (con Honores) lo que me permitió enseñar Literatura en español en la Northeastern Illinois University y en St. Augustine College en Chicago. Me jubilé en el año 2017 y en la actualidad me dedico a*



*escribir libros pedagógicos que espero donar a los sistemas de educación de Magallanes.*

*Cumplida cabalmente la pena de extrañamiento de cinco años en EE. UU., la dictadura cívico-militar de esa época, ilegalmente me negó el derecho de regresar a mi país durante once (11) años. Ni siquiera fui autorizado para viajar a Chile cuando fallecieron, mi padre en 1981, y mi madre un año después.*

*Por fin, en 1987, aparecí en la última lista de retorno de exiliados a Chile, cuando visitó nuestro país el Papa Juan Pablo II, de nombre secular Karol Wojtyla, y pude regresar a mi país.*

*En la actualidad, resido en EE. UU., lo cual significa estar con mi familia aumentada con seis maravillosos nietos, dos de ellos, los mayores, nacionalizados chilenos. Con mi esposa viajamos una o dos veces cada año a nuestra tierra, con la intención de establecernos en Chile definitivamente en el futuro próximo, dada nuestra avanzada edad."*

#### b. CENTROS DE DETENCIÓN

A efectos de complementar el relato del demandante, pasó a describir brevemente cada uno de los Centros de Detención y/o de interrogatorios en los que le tocó estar. Para lo cual reprodujo parte de la descripción que para cada uno de ellos figura en demanda interpuesta por 32 ex presos políticos de Isla Dawson, correspondiente a los autos rol C-803-2008, seguidos ante el 18° Juzgado Civil de Santiago, caratulados "VALENCIA OYARZO ELI/FISCO DE CHILE":

##### i. CAMPO DE CONCENTRACIÓN RIO CHICO, ISLA DAWSON

##### 1. Descripción del Campo de Concentración Rio Chico

Indicó que el campo Rio Chico se caracterizó por su diseño similar a los campos de concentración nazis en Europa durante la segunda guerra mundial. Había guardias fuertemente armadas apostadas en los cerros que colindaban con el campo. Cercas de alambres púas



rodeaban cada barraca y el campo mismo (27 alambradas en total). Las barracas eran de construcción ligera, de madera y planchas de zinc, por donde se filtraba fácilmente el viento y el frío.

El Campo de Concentración Río Chico estaba ubicado entre 15 a 20 kilómetros de Puerto Harris, en la costa, en una hondonada con cerros medianos a sus lados. El campamento tuvo cinco barracas: Alfa, Bravo, Charlie, Remo e Isla. Río chico comenzó a funcionar el 15 de diciembre de 1973 con los prisioneros trasladados de Compingim: el 21 de diciembre de 1973 comenzaron a llegar prisioneros trasladados de los diversos centro de detención de Punta Arenas y llenaron las barracas Alfa, Bravo y Charlie. Estas barracas tenían capacidad entre 80 a 90 personas. Los prisioneros que venían del norte estaban en la barraca Isla.

Agrega que la barraca Remo se estableció el 1 de febrero de 1974 con los 17 de los 19 primeros condenados por consejos de guerra de Magallanes. La mayoría de estos prisioneros eran socialistas, 16 de 17. Estos ocuparon la que era la barraca Charlie, a la cual se le pusieron barrotes en las ventanas y taparon las alambradas de púas con latas de zinc para aislar a estos condenados del resto de los prisioneros políticos. La barraca Remo tuvo alrededor de 50 prisioneros. Estos prisioneros eran tratados con un grado mayor de represión, ya que se les consideraba de una alta peligrosidad.

2. Torturas y represión en el campo de concentración Río Chico.

Indicó que el campo de concentración de Río Chico, se perfeccionó el sistema de represión contra los prisioneros políticos establecido previamente en el campo de concentración de Compingim. Este régimen era caracterizado militarización de los prisioneros y trabajos forzados, con uso de castigos físicos y celdas





de aislamiento y castigo. La alimentación y calefacción eran pésimas y se enfrentaban condiciones climáticas adversas - nieve, escarcha y viento - y un total aislamiento. Este sistema de represión buscaba sistemáticamente ablandar y quebrar la resistencia física y psicológica de los prisioneros políticos. Los prisioneros fueron asignados una letra y un número, reemplazando sus nombres, que identificaban la barraca en que estaban secuestrados y el orden en que habían llegado. Cada barraca tenía un delegado, el cual podía comunicarse con los guardias a nombre de los prisioneros y transmitía las órdenes de los guardias a los prisioneros. La comunicación de los prisioneros con sus familiares se llevó a cabo a través de un sistema de censura coordinado por los servicios de inteligencia militar y la Cruz Roja de Magallanes. Los prisioneros podían recibir, irregularmente cada varias semanas, una encomienda y una carta de correspondencia censurada de ocho líneas por medio de este sistema.

Los castigos físicos que se le aplicaba a los prisioneros consistían en duros ejercicios físicos, escuadras de fierro, horas adicionales de trabajos forzados, acarreo de arena mojada en sacos de un lado hacia a otro, castigos en celdas semi-abiertas expuestas al viento, lluvia y escarcha, formación en el patio central durante largos periodos soportando temporales de nieve y lluvia congelada, simulacros de ataques, amenazas de ejecuciones, allanamientos, encierros en las barracas, privación de alimento y sueño. (...)

A los prisioneros políticos de isla Dawson, en muchas ocasiones, se les obligó a ingerir sus raciones de alimento en silencio, con tiempo limitado, mientras eran apuntados por fusiles ametralladoras y se les amenazaba con hacerlos volar al instante con granadas. El teniente de la infantería de marina Jaime Wenderlaufen fue uno de los oficiales que sobresalió en





la implementación de estas amenazas y simulacros de ataques contra los prisioneros y en el establecimiento de un constante ambiente de terror en el funcionamiento del campo de concentración.

La sistematización de los trabajos fue el eje central de la política de tortura física y psicológica aplicada contra los prisioneros en este campo de concentración. Los trabajos forzados buscaban el continuo desgaste físico y psicológico de los prisioneros. Estos trabajos se llevaban a cabo diariamente en dos jornadas, una en la mañana y otra en la tarde. Estos trabajos se llevaban a cabo bajo una estricta vigilancia militar (...). En el campo de concentración Rio Chico, entre otras actividades, los trabajos forzados incluyeron trabajar en el mantenimiento del campo, sacar la basura, limpiar el rio del lugar, remover troncos quemados de los senderos alrededor del campo, acarrear arena de playa en sacos, reparar caminos y cortar y acarrear troncos de árboles al hombro desde el bosque donde eran cortados hasta el campamento. Todos estos trabajos se hacían bajo constante presión psicológica y física. Muchas veces, había que acarrear las excesivas cargas de troncos al trote y punteados en las espaldas por los fusiles de los guardias. Además, había que soportar el viento, lluvia y frio que a menudo azotaba la Isla, y la escarcha y la nieve del largo invierno de 1974.

En general, había un constante flujo de prisioneros rotando entre Punta Arenas e Isla Dawson. Dawson funcionaba como el principal centro de concentración de prisioneros, donde se decidía donde y cuando debían ser torturados. Los prisioneros de Dawson eran llevados regularmente a interrogatorios y sometidos a sistemáticas torturas en los centros especializados para estos fines que estableció la Dictadura en Punta Arenas. Este flujo de prisioneros era coordinado por el SIRMA y



las fiscalías naval y militar. Los fiscales capitán Gerardo Álvarez y el capitán de corbeta Jorge Beytia, personalmente interrogaron a prisioneros políticos en el campo de concentración de Rio Chico. (...)

En varias ocasiones agentes de los servicios de inteligencia interrogaron a prisioneros en el mismo campo, y participaban en los allanamientos que se efectuaba a las barracas de los prisioneros. El recinto de la comandancia del campo y el de la guardia se utilizaron para interrogar prisioneros.

3. Guardias militares del campo de concentración Rio Chico.

Señaló que el primer comandante del Campo Rio Chico, en diciembre de 1973, fue el capitán París. Posteriormente en enero de 1974 fue designado como comandante el capitán Mario Zamora, del regimiento blindado de Punta Arenas. El capitán Zamora era conocido como torturador particularmente de mujeres en el regimiento Blindado de Punta Arenas. El comandante Zamora estableció el régimen de trabajos forzados que caracterizó el campamento Rio Chico, e impuso un sistemático programa de castigos y de ablandamiento a los prisioneros políticos. En febrero de 1974 se hizo cargo del Campo el capitán Varas, que también venía del Regimiento Blindado en Punta Arenas. El capitán Varas impuso un sistema de guardia más deferente y discontinuó los trabajos forzados durante sus semanas de permanencia a cargo del campo de concentración.

Dijo que el 20 de marzo de 1974 tomaron el campo los infantes de marina a cargo del teniente Eduardo Carrasco y los subtenientes Jaime Weinerlaufen y Mario Tapia. Los Infantes de marina tenían la reputación de manejar uno de los más horrorosos y terribles campos de detención en Punta Arenas, el campo clandestino galpón Cochrane. Esta guardia de los infantes de marina fue designada y anunciada como una guardia de castigo para los



prisioneros de Río Chico. Se caracterizó por su dureza y el alto grado de represión que estableció en el campo. Los trabajos forzados y los castigos se reanudaron con alta intensidad y se aumentó considerablemente la militarización del campo.

A mediados de abril de 1974, vuelve como comandante del campo el capitán Zamora, acompañado de los subtenientes Bustamante y Valenzuela. Esta guardia continuó con el régimen de militarización, rudeza y represión impuestos en el campo. Esta guardia se caracterizó por la volatibilidad de los oficiales y las continuas amenazas simulando el uso de explosivos y simulacros de disparos con fusiles automáticos contra los prisioneros. Estuvieron a cargo del campo hasta mediados de mayo de 1974.

Después llegaron otras guardias, incluyendo militares del Regimiento Caupolicán de Porvenir y Regimiento Lanceros de Puerto Natales que continuaron con los trabajos forzados y la militarización del campo.

Los prisioneros de la barraca Isla, donde estaba detenido el grupo de dirigentes nacionales del Gobierno de la Unidad Popular, fueron evacuados de la Isla el 8 de mayo de 1974. Los llevaron caminando desde el campamento hasta el aeropuerto de Dawson, haciéndolos cruzar las aguas heladas de un río en esta caminata de 15 kilómetros. Posteriormente los prisioneros de Remo fueron trasladados a ocupar esta barraca. El campo de concentración Río Chico se cerró el 26 de septiembre de 1974. Dawson como isla prisión confinó a más de 700 prisioneros políticos entre septiembre de 1973 y septiembre de 1974.

ii. REGIMIENTO DE INFANTERÍA MOTORIZADA N° 10 PUDETO, PUNTA ARENAS.

Indicó que en el Regimiento Pudeto de Punta Arenas se confinaron a varios centenares de prisioneros políticos entre 1973 y 1975. Las dependencias de este



Regimiento, ubicado en Calle Zenteno esquina Avenida Independencia, muy cerca del centro de la ciudad de Punta Arenas fueron utilizadas desde el día 11 de septiembre de 1973, como lugar de detenciones masivas, interrogaciones y tortura. Este recinto militar es uno de los tres regimientos que sitían la ciudad de Punta Arenas.

En este recinto militar se presentaron, después de ser llamados en bandos militares, una gran cantidad de ciudadanos de Punta Arenas. Al momento de su presentación eran secuestrados y recluidos en el Gimnasio del regimiento Pudeto. En Septiembre de 1973, el Regimiento Pudeto estaba bajo el mando del Coronel René Agustín Witto que fue dado de baja y reemplazado por el Teniente Coronel Rubén Madrid Lillo. El segundo comandante del regimiento era el Coronel Claudio Pons Troncoso. Este regimiento dependía de la V División del Ejército que a la fecha estaba bajo el mando del General Manuel Torres de la Cruz. Sobre estos tres últimos individuos recae la responsabilidad superior jerárquica del diseño, implementación y mando del centro de detención clandestino del Gimnasio del regimiento Pudeto y las violaciones de DDHH cometidas contra los prisioneros políticos en este recinto militar entre 1973-1975.

En el Pudeto había un flujo regular de prisioneros, nuevos arrestados, otros que eran liberados y otros que eran trasladados o venían de otros campos de detenciones, especialmente de los campos de concentración de Isla Dawson. Otros eran llevados o traídos por agentes del SIRMA de los centros especializados de tortura o de las fiscalías militar o naval.

En este recinto clandestino, existieron varios lugares de detención, el más grande fue el Gimnasio del Regimiento. Este era un amplio gimnasio en madera y



cemento, donde no había nada para dormir, se dormía en el suelo de la cancha, en los asientos de las graderías, con una frazada, se ocupaba todo el espacio; en los meses de septiembre a Diciembre de 1973, pasaron centenares de prisioneros políticos magallánicos por este recinto. En diciembre de 1973 había cerca de 150 prisioneros políticos en el Gimnasio del Pudeto, incluyendo a varios prisioneros que eran menores de edad.

El Teniente Coronel Gregorio Waissbluth era el responsable jerárquico por los prisioneros políticos en 1973. El Teniente Julio Márquez era el principal responsable del funcionamiento diario del centro de detención de prisioneros en el Gimnasio del Regimiento. Este teniente mantenía el Gimnasio en un permanente estado de tensión a través de constantes amenazas, regulares castigos y golpeando a los prisioneros. Es reconocido como torturador en el recinto del Regimiento Pudeto. El teniente Márquez era también encargado de coordinar e implementar el traslado de los prisioneros políticos desde el Regimiento Pudeto a los distintos centros especializados de interrogatorio y torturas en Punta Arenas. En varias ocasiones, el mismo les colocaba la venda a los prisioneros políticos que iban a ser torturados.

Las torturas se practicaban periódicamente en los patios, canchas de tiro y campos interiores de ejercicios del regimiento. En el interior del regimiento, se torturó en la enfermería del

Regimiento por efectivos de civil de los servicios de inteligencia de la Región Militar Austral (RMA). También existió un lugar para interrogar y torturar en el hall de entrada del Gimnasio. Este lugar era particularmente siniestro, porque al interior del gimnasio estaban los más de 200 presos, obligados a



escuchar toda la crueldad de estas largas horas de tortura.

A un número menor de prisioneros, se le asignó realizar trabajos forzados, haciendo unas zanjias de 200 metros para la instalación de gas en el regimiento.

En el Regimiento Pudeto se llevó a cabo el primer consejo de guerra de prisioneros políticos de Magallanes, contra 13 militantes de la Juventud Socialista y partido Socialista. La implementación de este consejo fue supervisada directamente por el General de la V División de Ejército, Manuel Torres de la Cruz.

Desde el 21 de Diciembre de 1973, cuando se traslada masivamente a los más de 200 prisioneros al Campo de Concentración Río Chico de Isla Dawson, se habilita un container donde quedan 13 detenidos durante dos días para ser trasladados al Estadio fiscal. Posteriormente, aproximadamente el 10 de Enero de 1974 al interior del Regimiento se habilita un nuevo lugar de detención, que los prisioneros denominan "la cueva". Este era un espacio en el sótano del Casino de Suboficiales, lugar estrecho, de gran hacinamiento y con gran cantidad de ratones. Las condiciones en que eran mantenidos los prisioneros políticos en La Cueva eran Sub-humanas. El 19 de noviembre de 1974, cuando se cierra el campo de prisioneros que la FACH mantenía en el Estadio Fiscal de Punta Arenas, se abre otro lugar para confinar a los detenidos que llegaban del Estadio Fiscal, los camarines que se ubicaban al fondo del Gimnasio del Regimiento Pudeto. Este recinto de detención funcionó hasta el 10 de enero de 1975, cuando los detenidos son trasladados hasta el centro de detención de la infantería de Marina, el Galpón de Cochrane en Punta Arenas. Se estima que alrededor de 350 prisioneros políticos fueron secuestrados y confinados en el Regimiento Pudeto entre 1973 y 1975.

c. CONSEJO DE GUERRA EN CONTRA DEL DEMANDANTE:



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KYXMXKEYEQE

Dijo que el demandante fue sometido injusta e ilegalmente a Consejo de Guerra en Magallanes, instancia en que como es sabido, se desconocieron y vulneraron deliberada y sistemáticamente los derechos procesales y, en particular, el derecho de defensa de los enjuiciados.

#### i. LOS CONSEJOS DE GUERRA

Expuso que los procesos ante los Consejos de Guerra evidentemente adolecieron de una serie de irregularidades, al punto que incluso es inadecuado referirse a ellos como "procesos" propiamente tales.

Dijo que todo indica que se trató de meras formas procesales utilizadas con fines represivos y políticos. Pero quizás las mayores objeciones tienen su fundamento en los métodos utilizados para la averiguación de los hechos, en particular, la tortura a los imputados para obtener declaraciones auto inculcatorias o atributivas de responsabilidad respecto de otros inculcados. Para muchos, estos procesos no fueron sino una mera excusa para torturar y propinar malos tratos a disidentes políticos.

Un completo desarrollo del marco normativo, de la estructura y funcionamiento de los Tribunales Militares en Tiempo de Guerra, así como del "procedimiento" seguido ante los Consejos de Guerra, lo encontramos en sentencia de nuestra excelentísima Corte Suprema, de fecha 3 de octubre de 2016, recaída en autos de revisión rol N° 27.543-2016, que anuló dos sentencias judiciales dictadas más de cuarenta años antes, en 1974 y 1975, por los Consejos de Guerra instalados por la Dictadura. Esos fallos habían sido dictados en el proceso rol 1-73 "Fuerza Aérea de Chile contra Bachelet, Alberto y otros", el que reproduce:

*"Sexto: Que en cuanto al marco legal que dio lugar a la actuación de los Consejos de Guerra en Chile a partir del año 1973, cabe consignar que el Título III del Libro I del Código de Justicia Militar establece los*





*Tribunales Militares en Tiempo de Guerra. Su artículo 71 determina cuáles son los que ejercen la jurisdicción militar y el 73 dispone que su competencia en el territorio declarado en estado de asamblea o de sitio comenzará desde el momento en que se nombre General en Jefe de un Ejército que debe operar contra el enemigo extranjero o contra fuerzas rebeldes organizadas; agrega el precepto, que desde ese momento, cesará la competencia de los Tribunales Militares en tiempo de paz. Según el artículo 418 del mismo cuerpo legal, "se entiende que hay estado de guerra o que es tiempo de guerra, no sólo cuando ha sido declarada oficialmente la guerra o el estado de sitio, en conformidad a las leyes respectivas, sino también cuando de hecho existiere la guerra o se hubiese decretado la movilización para la misma, aunque no se haya hecho su declaración oficial". Del texto del citado artículo 73 se infiere que para el funcionamiento de Tribunales Militares en Tiempo de Guerra se precisa la existencia de fuerzas extranjeras enemigas, si se trata de Guerra Externa, o de fuerzas rebeldes organizadas, en el caso de guerra interna; y, conforme al inciso segundo del artículo 419 se entiende por enemigo, no solamente al extranjero, sino cualquiera clase de fuerzas rebeldes o sediciosas organizadas militarmente. Se precisan así, dos diversas situaciones: la guerra externa y la interna o conmoción interior, ambas también, con exigencias diversas, pero con particularidades comunes. En los dos casos se produce una ampliación de la jurisdicción, se tipifican nuevas figuras delictivas con motivo del "estado" o "tiempo" de guerra y se establecen sanciones más severas. Concordando las disposiciones de los artículos 73 y 419 del mencionado Código, cabe concluir que, tratándose de guerra interna, adquieren competencia los Tribunales Militares en Tiempo de Guerra solamente cuando se está en presencia de fuerzas rebeldes sediciosas organizadas*



militarmente. Con respecto a los Consejos de Guerra que se constituyeron con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, debe recordarse que el Decreto Ley N° 3, de esa fecha, dictado por la Junta de Gobierno que asumió el Mando Supremo de la Nación el mismo día, declara el "Estado de Sitio en todo el territorio de la República, asumiendo esta Junta la calidad de General en Jefe de las Fuerzas que operarán en la emergencia". El Decreto Ley N° 4, de igual fecha, declara "en estado de emergencia hasta por el plazo máximo previsto en el artículo 31, inciso segundo, de la Ley N° 12.927" a las provincias y departamentos que señala, designando Jefes de ellas a los Oficiales de las Fuerzas Armadas que indica, con las facultades determinadas en los artículos 33 y 34 de la misma ley. El Decreto Ley N° 51, de 2 de octubre de 1973, autorizó amplia delegación de las atribuciones del General en Jefe en los Comandos que manden divisiones o brigadas. El Decreto Ley N° 5, de 12 de septiembre, declara, interpretando el artículo 418 del Código de Justicia Militar, que el estado de sitio decretado por conmoción interna en las circunstancias que vive el país, debe entenderse "estado o tiempo de guerra" para los efectos de la aplicación de la penalidad de ese tiempo que establece el Código de Justicia Militar y demás leyes penales y, en general, para todos los demás efectos de dicha legislación". Entre otros motivos, el Decreto Ley se fundamenta en la situación de conmoción interna en que se encuentra el país; en la necesidad de reprimir en la forma más drástica posible las acciones que se cometen contra la integridad física del personal de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de la población en general, y en la conveniencia de dotar de mayor arbitrio a los Tribunales Militares en la represión de algunos de los delitos de la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas, por la gravedad que invisten y la frecuencia de su comisión, extendiendo



la competencia de los Tribunales Militares en tiempo de guerra al conocimiento de distintos hechos punibles que ella sanciona. Los citados Decretos Leyes declaran en estado de sitio, de emergencia, o en "estado de tiempo de guerra" el territorio de la República, considerando la situación de conmoción interior que vivía el país y demás motivaciones recién señaladas, pero prescinden de la exigencia legal de "fuerzas rebeldes organizadas" o de "cualquiera clase de fuerzas rebeldes o sediciosas organizadas militarmente". Lo expresado evidencia que el estado de sitio decretado conduce a un "estado o tiempo de guerra denominado preventivo" y no real, dado que los aludidos Decretos Leyes nunca invocaron ni pretendieron fundar sus decisiones en la existencia de fuerzas rebeldes o sediciosas militarmente organizadas. Estas reflexiones y el claro sentido de los preceptos de los artículos 73 y 419 del Código de Justicia Militar, autorizan a afirmar que ese estado o tiempo de guerra "preventivo" se utilizó para justificar el funcionamiento de esa jurisdicción extraordinaria indebidamente convocada que permitió el juzgamiento y la sanción de hechos perpetrados con anterioridad al 11 de septiembre de 1973 o sea con fecha previa a la constitución de dichos Consejos de Guerra y de otros sucesos que claramente no constituían hechos punibles tipificados en la ley penal, quebrantando fundamentales normas de derecho, que inducen claramente a sostener que se instrumentalizó un estado de guerra para activar artificiosamente una competencia castrense indebida, pero además para con ningún control cometer en contra de la población delitos graves que el derecho internacional considera como de lesa humanidad. Esta preceptiva, en rigor, no hacía otra cosa que retirar de manos de la justicia ordinaria en beneficio de la justicia militar de tiempo de guerra el "conocimiento y la decisión de las causas por infracción a las normas sobre estado de



sitio". Los estados de excepción serían renovados sin interrupciones durante quince años seguidos, mientras el estado de sitio -categoría que ampliaba aún más la discrecionalidad del poder en su tarea represiva, concedió a las autoridades de gobierno la facultad de ordenar arrestos arbitrarios, censurar la prensa y suspender un cúmulo de libertades civiles-situación que se prolongaría hasta marzo de 1978, y posteriormente se restableció en dos ocasiones, ambas en la década de 1980. Como ya se expresó, el Decreto Ley N° 5, de 11 de Septiembre de 1973, publicado en el Diario Oficial del día 22 del mismo mes, declaró por la vía interpretativa, que el estado de sitio decretado por conmoción interna, debía entenderse "estado o tiempo de guerra". Sin embargo, con infracción de fundamentales normas legales, las nuevas penalidades fueron aplicadas por los Consejos de Guerra y demás Tribunales Militares que actuaron durante el "estado o tiempo de guerra" con sujeción a esa nueva legislación, a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia, contraviniendo en forma expresa las disposiciones de los artículos 11 de la Constitución Política de 1925, vigente en la época, y 18 del Código Penal, que consagran la irretroactividad de la ley penal, principio universalmente aceptado. En síntesis, la declaración jurídica de guerra actuó como ficción legal y justificación política para acciones represivas sin correspondencia con el contexto de referencia, utilizándose como instrumento de coacción y castigo a los tribunales militares en tiempo de guerra. Séptimo: Que en cuanto al procedimiento que rige para los Consejos de Guerra, las disposiciones que establecen la estructura y funcionamiento de los Tribunales Militares en Tiempo de Guerra, configuran un ordenamiento jerárquico autónomo e independiente de toda otra autoridad de la jurisdicción ordinaria. Ese ordenamiento culmina en el General en Jefe, a quien se



le otorga la plenitud de una jurisdicción que, por su propia naturaleza y amplitud, excluye toda posibilidad de intervención de tribunales que no se encuentren incluidos en esa organización jerárquica, con excepción de la actual competencia de esta Corte Suprema para conocer de la acción de revisión como se dirá más adelante. Los Consejos de Guerra están sometidos jurisdiccionalmente al General en Jefe del territorio respectivo, que tiene facultades omnímodas para aprobar, revocar o modificar las sentencias de los referidos Consejos, y para ejercer sobre ellos la jurisdicción disciplinaria de acuerdo con lo que dispone el artículo 74 del Código de Justicia Militar, ubicado en el Título III referente a los Tribunales Militares en Tiempo de Guerra. Los artículos 82 a 86 del Código de Justicia Militar determinan los casos en los cuales se formarán los Consejos de Guerra y la manera como se integrarán en las distintas posibilidades que consideran. El Título IV del Libro II del Código de Justicia Militar contiene el procedimiento penal en tiempo de guerra y el Título V, en disposiciones complementarias, se refiere a los Abogados y Oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que pueden actuar como defensores en los Consejos de Guerra, estableciendo su obligatoriedad para los militares, para los abogados de turno y para los designados por el Fiscal. La normativa aludida establece, además, que convocado el referido Consejo y señalado el lugar, día y hora en que debe funcionar, se pondrá el hecho en conocimiento de los inculpados, quienes deberán designar defensor y, en su defecto, el Fiscal de Oficio hará la designación. En el tiempo que medie entre la convocatoria y la celebración del Consejo, el defensor podrá imponerse de todos los antecedentes que existan en poder del Fiscal, pudiendo por su parte, reunir los que estime convenientes a la defensa. Puede comunicarse con el inculpadado sin que



ninguna incomunicación lo impida. El defensor debe hacer por escrito la defensa del caso, señalando los medios probatorios de que se valdrá y la lista de testigos y peritos que depondrán e informarán en la audiencia de prueba. El Fiscal deberá citarlos a la audiencia con la debida oportunidad. Constituido el Consejo, se hace pasar al reo y a su defensor, quien deberá indicar si tiene alguna causal de implicancia o recusación en contra de alguno de los miembros del Consejo, y si existiere y se acepta, deberá de inmediato nombrarse reemplazante. El Fiscal hace una relación del sumario y da lectura al dictamen o a los cargos pertinentes. El defensor o el reo leen las defensas, y luego, se recibe la prueba ofrecida, debiendo los testigos ser interrogados separadamente, pero los miembros del Consejo, el Fiscal o el Defensor pueden pedirles que aclaren o expliquen puntos dudosos en sus declaraciones. Respecto de los testigos que residan en lugares distintos a aquel en que se sigue el juicio, podrá disponerse que se les interroge por exhorto. Si el Consejo estima necesario practicar el reconocimiento de algún lugar u objeto que no sea posible llevarse a su presencia, podrá comisionarse a uno o más de sus miembros para que lo efectúen, con asistencia de peritos, en caso necesario, y concurrencia del Fiscal y el defensor, y si se estima conveniente, podrá ordenarse la asistencia del reo, suspendiéndose, entre tanto, el funcionamiento del Consejo. Luego, el Presidente ordena desalojar el local, y acto continuo, en acuerdo secreto, procede el Consejo a deliberar y resolver todas las cuestiones propuestas, debiendo pronunciarse sobre la absolución o condena del inculpado, y en este último caso, fijará con toda precisión la pena que se le imponga. La prueba se aprecia de acuerdo con las reglas procesales genéricas, pero puede apreciar en conciencia los elementos probatorios a fin de llegar a establecer





la verdad de los hechos. La sentencia es redactada en el acto por el Auditor, dejándose constancia en ella de las disidencias y sus fundamentos. Se notifica personalmente al reo y al Fiscal y se eleva con todos los antecedentes al conocimiento del General o Comandante en Jefe para su aprobación o modificación. El Consejo funciona sin interrupción y públicamente, salvo para el acuerdo de sus resoluciones y cuando en casos calificados determine lo contrario. Octavo: Que conforme a lo que se ha señalado, los Consejos de Guerra convocados a partir del año 1973 actuaron, en la práctica, contraviniendo su propia normativa, pues sólo se aplicaron sus procedimientos coercitivos, ignorando los demás efectos jurídicos de la guerra, al no reconocer el uso legítimo de la fuerza por parte de sus oponentes, tampoco se respetó el carácter y los derechos de los prisioneros, ni se consideró ninguno de los preceptos establecidos en las convenciones internacionales sobre la guerra. Téngase presente que en el derecho internacional, como testimonio del rechazo unánime y sin reservas a la tortura, ésta se encuentra proscrita de las

leyes, incluso de las leyes de la guerra, en cuyo caso es lícito matar en el curso de acciones bélicas, pero nunca torturar. Es más, los fiscales, a quienes en materia penal competía instruir y sustanciar todos los procesos, recogiendo y consignando las pruebas pertinentes, deteniendo a los inculpados y produciendo los elementos de convicción que fueran del caso, representaron un eslabón más en la cadena de los agentes represores. En efecto, según los informes reseñados en los motivos anteriores, dichos funcionarios se limitaron a recibir y a consignar antecedentes contrarios a los inculpados, omitiendo toda actuación o diligencia que pudiera beneficiarlos y exculparlos, siendo que a ellos tocaba investigar la verdad de los hechos y reunir los antecedentes que sirvieran para comprobarlos. No





obstante, las declaraciones de los inculpados nunca fueron investigadas, optándose por rechazarlas en beneficio de las pruebas oficiales. O bien, en vez de interrogar personalmente a los implicados, a menudo los fiscales se conformaron con interrogatorios realizados por funcionarios desvinculados de los tribunales militares, en recintos ajenos a los mismos y mediante apremios que extraían confesiones ajustadas a los requerimientos de los torturadores. El análisis de los procesos revela que, actuando con sistemático descuido de la imparcialidad del debido proceso, los fiscales permitieron y aun propiciaron la tortura como método válido de interrogatorio. Igual puede decirse de otros miembros de los tribunales militares que -es el caso de los auditores- privilegiaron la misión punitiva de los mismos (Informe Valech, pp. 176-177). Tampoco se reconoció el derecho a defensa. En todo procedimiento penal los imputados gozan de diversos derechos y garantías. Por ejemplo, que se les informe de manera específica y clara de los hechos que se les imputan; ser asistidos por un abogado desde los actos iniciales de la investigación; solicitar que se active la misma y conocer su contenido; solicitar el sobreseimiento de la causa; guardar silencio o declarar sin juramento; y no ser sometidos a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. No obstante, según los referidos informes, los imputados por los tribunales militares en tiempo de guerra a contar de 1973 casi nunca gozaron de los derechos antes señalados, puesto que en tales tribunales militares la norma fue la de desconocer esos derechos y garantías; no se sabía con certeza de los hechos imputados; apenas se conocía la causal de detención, incluso en los casos en que existieron delitos reales de por medio. A veces se detenía por pertenecer a una institución o empresa. Otras sólo por ser o haber sido funcionario de una repartición pública



determinada. En general, la intervención de los abogados en las distintas actuaciones de la investigación se restringió al final de las mismas, y cuando podían actuar era por un corto tiempo. Los abogados, a quienes se acostumbraba impedirles el acceso a sus defendidos, debían partir por rastrearlos en los distintos centros de prisión; luego, intentar obtener algún documento que acreditara su detención; posteriormente, presionar para que se les sometiera a alguna modalidad de juicio que concluyera la etapa de "investigación", que solía traducirse en torturas. Así como estaba la situación, la convocatoria a un consejo de guerra podía aparecer como un paso adelante. Éste al menos admitía la posibilidad de la defensa, si bien no siempre inmediata, pues fue común la práctica, por parte de los fiscales, de reservar sólo un día al mes para la atención a

los abogados y era corriente en todo caso, que no concurrían a dicha cita en la fecha prevista, con lo cual los asuntos a tratar por éstos se postergaban, prolongándose el cautiverio de sus defendidos. Por añadidura, tampoco era posible solicitar diligencias y decisiones. No era permitido conocer las actuaciones. Además, la fundamentación de las sentencias de los tribunales militares solía ser muy pobre, de un nivel ostensiblemente inferior al propio de una judicatura. Carecían de un sólido cuerpo de reflexión. En muchos casos se dieron por establecidos los hechos y los delitos sin mayores fundamentos, se indicaron someramente las defensas de los inculpados y se rechazaron rápidamente por ser contrarias a las conclusiones anteriores. Por lo común, no se hizo un análisis jurídico de las conductas establecidas, y éstas se encuadraron con facilidad en tipos penales elegidos de antemano. Incluso se declararon reprochables conductas que nunca lo fueron legalmente, configurando delitos instrumentales a los acusadores. Con frecuencia



*se admitió la sola confesión para acreditar los delitos. Y se hizo un empleo indiscriminado de las presunciones. Hubo sentencias que se conformaron con aprobar las conclusiones del fiscal, quien, a su vez, se limitaba a aceptar la denuncia militar o policial; en otros casos ni siquiera se mencionaron los hechos por los cuales se procesaba, o apenas se consignaron genéricamente (Informe Valech, pp. 177-178. Ver también Informe Rettig pp. 83-84)".*

#### ii. LOS CONSEJOS DE GUERRA EN MAGALLANES

señaló que los principales Consejos de Guerra de prisioneros políticos en Magallanes fueron 6 y se llevaron a cabo durante 1973 -1974. En estos consejos se procesaron a 97 personas, 49 socialistas y 48 comunistas, incluyendo a 8 mujeres. Estos consejos fueron efectuados fuera de toda la legalidad existente hasta 1973. Todos estos prisioneros fueron torturados y no tuvieron representación jurídica adecuada.

Los CONSEJOS DE GUERRA EN MAGALLANES fueron:

1) Primer Consejo contra el Partido Socialista: Este consejo tuvo lugar en noviembre de 1973 y se procesaron a 5 miembros de la dirección regional del Partido Socialista y 8 dirigentes y miembros de la Juventud Socialista. Estos incluyeron dos menores de 16 años (un hombre y una mujer), uno de 17 años y tres de 18 años. Todos estos prisioneros políticos fueron condenados a sentencias que fluctuaron de cinco años a cadena perpetua.

2) Consejo de Guerra Hospital Regional: Este consejo fue llevado a cabo contra trabajadores y dirigentes sindicales del Hospital Regional de Punta Arenas. Fue efectuado en diciembre de 1973. Este consejo condenó a prisión a 5 militantes del Partido Socialista y un dirigente estudiantil comunista.

3) Consejo de Guerra contra el Partido Comunista: Este consejo tuvo lugar en abril de 1974 y se procesaron



a 27 dirigentes políticos y sociales del Partido Comunista. Todos fueron condenados y las sentencias fluctuaron desde 3 a 20 años de prisión.

4) Consejo de Guerra contra la Juventud Socialista: Este consejo tuvo lugar en julio de 1974 y se procesaron a 10 dirigentes y miembros de la Juventud Socialista. Estos jóvenes socialistas tenían entre 16 y 20 años, incluyendo cuatro mujeres. Las sentencias fluctuaron entre 6 meses a 3 años de prisión.

5) Consejo de Guerra contra la Juventud Comunista: Este consejo tuvo lugar en agosto de 1974 y se procesaron a 20 dirigentes de la Juventud Comunista. Estos prisioneros incluyeron a 2 mujeres. Los condenados recibieron sentencias hasta cuatro años de prisión.

6) Segundo Consejo de Guerra contra el Partido Socialista: Este consejo tuvo lugar en Octubre de 1974 y se procesaron a 21 dirigentes políticos y sociales del Partido Socialista. Estos prisioneros incluyeron a 4 miembros de la Juventud Socialista (tres de 20 años y uno de 18 años). Todos fueron condenados, y las sentencias fluctuaron desde 5 años de relegación a 18 años de prisión.

Otros Consejos: Entre 1973 y 1974, hubo varios consejos de guerra que involucraron a personas individuales donde se condenaron por lo menos a 6 prisioneros.

## II. EL DERECHO:

### A. HECHO ILICTO DE AUTOS COMO CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

Dijo que los antecedentes expuestos, sin duda, forman parte del catálogo de crímenes reconocidos en la comunidad internacional y en el Derecho Internacional, como "Crímenes de Lesa Humanidad".

Indica que la primera formulación para esta categoría de delitos, la encontramos en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional de Nuremberg de 1945, el



que, como sabemos, tuvo por objeto juzgar las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial; y surge como respuesta a la insuficiencia de la categoría "Crimen de Guerra" que sólo podía aplicarse a actos que afectaran a combatientes enemigos excluyendo a los crímenes cuyas víctimas eran del mismo país o de estados aliados o apátridas.

Según Bassiouni la trascendencia de dicho Estatuto reside en que "fue la primera instancia en el derecho penal internacional positivo que se usó el término específico de 'crímenes contra la humanidad'; asimismo, sería la primera vez que esta categoría de derecho internacional fue definida" (BASSIOUNI, Cherif. 1992. Crimes Against Humanity in International Criminal Law. Dordrecht, Martinus Nijhoff, p. 583).

Agregó que desde la terminación de los procesos de Nuremberg no se siguió ningún juicio ante tribunales internacionales sino hasta el comienzo de los años noventa, en donde se instauraron los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia ("TPIY") y para Ruanda ("TPIR"). Los estatutos de ambos Tribunales contribuyeron a reforzar la punibilidad consuetudinaria de los crímenes contra la humanidad, siguiendo en líneas generales y en lo esencial al Estatuto de Nuremberg. Sin embargo, tanto el Estatuto del TPIY como el del TPIR representan un nuevo avance en la materia al tipificar una mayor cantidad de conductas punibles a las establecidas en el Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg, que no contemplaba al encarcelamiento, a la tortura y a las violaciones.

Así, dice que en el año 2002 se llega a la culminación de un largo proceso de desarrollo del derecho penal internacional, mediante el establecimiento de la Corte Penal Internacional (que incluye la descripción de los crímenes de lesa humanidad), cuyo Estatuto ("Estatuto de Roma") se convierte en el



instrumento jurídico más importante y actualizado en la materia.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, tratado internacional vigente en nuestro país desde el día 01 de septiembre de 2009, tipifica, en su artículo 7, de la siguiente manera estos horrendos crímenes: "1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por 'crimen de lesa humanidad' cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física".

A nivel de normativa interna, señala que encontramos a la Ley N° 20.357, que "Tipifica Crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio y Crímenes y Delitos de Guerra", la que en su artículo 1 señala que "Constituyen crímenes de lesa humanidad los actos señalados en el presente



párrafo, cuando en su comisión concurren las siguientes circunstancias: 1°. Que el acto sea cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. 2°. Que el ataque a que se refiere el numerando precedente responda a una política del Estado o de sus agentes; de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos".

Por último, en el plano conceptual, señala que resulta interesante citar un voto de disidencia del Ministro Sr. Cisternas, en el que se refiere en los siguientes términos a esta categoría de delitos: "Que el concepto de delito de lesa humanidad -conforme aparece del examen de la evolución histórica de la doctrina y de la jurisprudencia- implica, por exigencia de su núcleo esencial, que sea el resultado de la actividad ilícita de algún grupo o sector de poder -usualmente el Estado o el gobierno que tiene el mando del mismo-, tendiente a la afectación, disminución o eliminación de los integrantes de todo o parte de un sector o grupo que aquel considera contrario a sí mismo o a determinados intereses que declara superiores, de manera sistemática y sin límite en el uso de los instrumentos o medios encaminados a ese fin" (Excelentísima Corte Suprema, Fallo recurso de casación en el fondo, de fecha 23 de enero de 2018. Rol 31.711-17).

Agregó que a la luz todo lo expuesto, resulta evidente que en el caso de marras nos encontramos frente a un ilícito que constituye un Delito de Lesa Humanidad, por lo que el Estado no puede eludir su responsabilidad civil por los padecimientos y dolores irrogados a mi representado, evadiendo a la normativa humanitaria internacional de naturaleza ius cogens.





## B. RESPONSABILIDAD ESTATAL POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Manifiesta que el concepto de responsabilidad es inherente al Estado de Derecho, además de ser un concepto jurídico fundamental sin el cual no es posible comprender y entender el Derecho como realidad normativa. El principio de responsabilidad es un principio fundamental del Estado de Derecho, cuya expresión es que cualquier persona que sea lesionada por otra persona en su persona física o moral o en sus bienes o derechos, tiene derecho a que se le repare el daño ocasionado, generando con ello para el causante la obligación de indemnizar.

Añade que se trata de un principio que impregna todo nuestro ordenamiento jurídico y adquiere las más variadas formas a través de estatutos jurídicos especiales de responsabilidad. Se habla, así, dependiendo del deber jurídico infringido, de responsabilidad penal, responsabilidad civil, responsabilidad política o constitucional, responsabilidad administrativa, responsabilidad medio ambiental, etcétera; pudiendo una misma infracción generar una o más clases de responsabilidad que pueden concurrir separada o conjuntamente.

Tratándose de violaciones a los Derechos Humanos, señala que la responsabilidad del Estado, y más específicamente, la obligación indemnizatoria del mismo, surge de la interacción normativa entre reglas internas, fundamentalmente de derecho constitucional, y reglas internacionales contenidas en diversas fuentes de Derecho Internacional Público.

Así como de la utilización de reglas interpretativas desarrolladas fundamentalmente por el Derecho Internacional, como son los principios de interpretación de buena fe, principio "pro homine" o "favor libertatis", interpretación evolutiva, equidad como



criterio de integración e interpretación judicial, y las reglas de ius cogens, como fuente normativa y como elemento para situar las reglas convencionales de Derecho Internacional.

Señaló que así lo ha venido sosteniendo consistentemente nuestra Excelentísima Corte Suprema: "Que, por otro lado, como ya se ha esbozado, la acción civil aquí deducida en contra del Fisco, tendiente a obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados, encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado chileno a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política de la República. Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esa índole, con el consecuente deber de reparación y de mitigar las consecuencias de la violación." (Excelentísima Corte Suprema, Considerando Sexto, Fallo recurso de casación en el fondo, de fecha 23 de enero de 2018. Rol 31.711-17. Entre otras, en idénticos términos: Considerando décimo, Fallo recurso de casación en el fondo, de fecha 13 de abril de 2015. Rol 20.288-14).

Dijo en similares términos el fallo unánime de la Segunda Sala de la Corte Suprema que ratificó la sentencia que ordenaba pagar una indemnización a 31 ex



presos políticos de Isla Dawson: "Que, además, las acciones civiles aquí entabladas por las víctimas en contra del Fisco, tendientes a conseguir la reparación íntegra de los detrimentos ocasionados, encuentra su fundamento en los dogmas generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación completa, en virtud de lo ordenado en los artículos 5°, inciso segundo, y 6° de la Constitución Política de la República. Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos preceptúan que la responsabilidad del Estado por esta clase de sucesos queda sujeta a disposiciones de Derecho Internacional, que no pueden quedar incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, por cuanto, de ventilarse un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la transgresión de una regla internacional, con el subsecuente deber de reparación y de hacer cesar los colofones del agravio". (Excelentísima Corte Suprema, Considerando Sexto, Fallo recurso de casación en el fondo, de fecha 23 de enero de 2018. Rol 31.711-17).

Expuso que así las reglas positivas de derecho interno pertinentes:

a) Constitución Política de la República (CPE)

En primer término, cabe mencionar al Artículo 1, inciso 4° de la CPE: "El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece."



El profesor Humberto Nogueira- a propósito de este inciso- señala que "la persona es el objetivo y finalidad de toda la actuación estatal, estando el Poder Público al servicio de la dignidad y de los derechos de la persona humana, aspectos esenciales que integran el bien común como fin y tarea de los órganos estatales" (NOGUEIRA., Humberto. "Los derechos esenciales o humanos contenidos en los tratados internacionales y su ubicación en el ordenamiento jurídico nacional: doctrina y jurisprudencia". Revista Ius et Praxis, vol. 9, (1): pp. 403-466, 2003. [en línea])

El bien común y los derechos fundamentales que arrancan de la naturaleza humana son dos conceptos íntimamente ligados, por cuanto la promoción del bien común implica inexorablemente el respeto de estos derechos, aceptar algo distinto significaría desvirtuar el objeto -servir a la persona humana- y fundamento principal del Estado. Luego, resulta fundamental mencionar lo dispuesto en el artículo 5, inciso 2° de la CPE, que: "El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes."

Dice que la parte final de este artículo -es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes- fue introducida por la reforma constitucional de 1989. Esta modificación consigna -para el Estado- obligaciones de respeto y promoción de los derechos esenciales emanados de la naturaleza humana. El Estado ya no acota su labor a la observancia pasiva y resguardo a posteriori -de ciertos



derechos enumerados en un catálogo determinado- pues promover implica una actitud activa encaminada al impulso y fomento de los derechos en cuestión.

De modo tal que, junto con reforzar la protección constitucional de los derechos humanos, consolida el desarrollo de un bloque constitucional -integrado por derechos asegurados formalmente en la Carta Magna y derechos y garantías contenidos en tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes- y reconoce en la propia Constitución la existencia de otros derechos humanos no considerados en ella, maximizando el plexo de derechos y garantías fundamentales.

Añadió que las disposiciones reseñadas, en conjunto con los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, que consagran los principios de supremacía constitucional y de legalidad respectivamente, conforman el denominado estatuto de responsabilidad extracontractual del Estado.

Artículo 6: "Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley."

Artículo 7: "Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es



nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.”

Conforme a los mismos, el Estado es responsable cuando sus órganos actúan al margen del derecho, ya sea vulnerando normas constitucionales o legales dictadas conforme a la Constitución (artículo 6, inciso 1°), o asumiendo funciones respecto de las cuales carecen de competencia legalmente atribuida (artículo 7). Estas infracciones generan dos tipos de efectos: la nulidad del acto administrativo y la responsabilidad del Estado por los perjuicios ocasionados.

Por último, dice que corresponde agregar el artículo 38, inciso 2° de la Constitución Política, que establece una verdadera acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad de los organismos del Estado, cuando estos por su actividad, ya sea lícita o ilícita, provoquen un daño a una persona natural y/o jurídica.

Artículo 38 inciso 2°: “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño.”

b) DFL N° 1, del 2000, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

En materia de responsabilidad del Estado, son pertinentes las siguientes disposiciones:

El Artículo 2 de la Ley N° 18.575, al señalar que: “Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el



ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes”.

El artículo 3 de la Ley en comento, al establecer que: “La Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común (...). La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas (...).”

El Artículo 4 del mismo cuerpo legal, al establecer imperativamente que: “El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado.”

Y finalmente, el Artículo 42 inciso 1° de la Ley 18.575 que señala: “Los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio.”

En cuanto a las Reglas positivas en el derecho internacional aplicables, señaló:

a) La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

El Artículo 1.1 de la CADH cuando señala que: “Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

Pues bien, ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que ha visto en este artículo





el fundamento de la responsabilidad internacional disponiendo que: "En efecto, dicho artículo (1.1) pone a cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y garantía, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho Internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención" (CIDH caso "Godine Cruz vs Honduras", parr. 173).

Agrega que ahondan sobre el punto, otros fallos de la CIDH que paso en reproducir: "La obligación conforme al derecho internacional de enjuiciar y, si se les declara culpables, castigar a los perpetradores de determinados crímenes internacionales, entre los que se cuentan los crímenes de lesa humanidad, se desprende de la obligación de garantía consagrada en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Esta obligación implica el deber de los Estados Parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción" (CIDH Caso



"Almonacid," párr.110. En el mismo sentido Caso "Goiburú y otros", párr.166. En el mismo sentido, ver Caso "La Cantuta", párr. 227.)

Dice que, como se observa, a juicio de la CIDH, el antes citado artículo 1.1., establece el fundamento del sistema de responsabilidad internacional para los Estados que son parte del sistema Interamericano, sometiendo a sus miembros a los imperativos del Derecho Internacional.

Luego, menciona que el artículo 2 de la CADH al disponer que: "Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades."

Finalmente, indica que artículo 63.1 de la CADH: "Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada".

El artículo 63.1 constituye la adopción por parte de la Convención de un principio del derecho internacional y, en general, del Derecho sobre la responsabilidad en orden a que quien daña a otro debe ser obligado a reparar los perjuicios causados, indemnizando.

Con base en lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana, dijo que la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo



adecuadamente, y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado.

Al respecto, dijo que la Corte ha señalado explícitamente que: "Tal como ha indicado la Corte, el artículo 63.1 de la Convención Americana refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación" (Caso Trujillo Oroza - reparaciones, párr. 60. En el mismo sentido ver: Caso Cantoral Benavides - reparaciones, párr. 40; Caso Cesti Hurtado - reparaciones, párr. 35; y Caso Villagrán Morales y otros - reparaciones, párr. 62; Caso Bámaca Velásquez - reparaciones, párr. 38).

b) Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT).

Señaló que son aplicables en la materia:

El Artículo 26 de la CVDT que señala que: "Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe." Y el artículo 27 del mismo tratado internacional: "Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado".

Finalmente, el artículo 53 de la CVDT que define al *ius cogens* como: "Una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter".

c) Estatuto de Roma



El artículo 38 letra c) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, dispone: "La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: c. Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas".

#### C. REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.

Indicó que la "reparación integral" implica que "debe repararse todo el daño, no más allá del daño, pero todo el daño".

Agrega que a nivel del sistema universal de derechos humanos, su expresión formal se encuentra en la Resolución de la Asamblea General N.º 60/147, sobre "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones", aprobada el 16 de diciembre de 2005. Aunque esta resolución no tiene la fuerza normativa de un tratado internacional, es particularmente relevante, en la medida en que, como señala el propio preámbulo de la resolución, estos principios, "no entrañan nuevas obligaciones jurídicas internacionales o nacionales", sino que proponen mecanismos para hacerlas efectivas. En este sentido, cabe destacar que la resolución establece expresamente el derecho de las víctimas a obtener una "reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido" (art. 11), mediante (i) la restitución; (ii) la indemnización; (iii) la rehabilitación; (iv) la satisfacción; y (v) la garantía de no repetición (art. 18). La propia resolución define cada uno de estos mecanismos. La primera, busca devolver a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos (art. 19). La segunda debe cubrir todos los perjuicios susceptibles de



evaluación económica, incluyendo, entre otros, el daño físico y moral (art. 20). La rehabilitación, se refiere a la atención médica, jurídica y social (art. 21). La satisfacción incluye medidas como la revelación completa de la verdad, las disculpas públicas y las sanciones a los responsables, entre otras (art. 22). Finalmente, las garantías de no repetición son aquellas medidas orientadas a la prevención, tales como el control civil sobre las fuerzas armadas, o la educación en derechos humanos, entre otras (art. 23).

En el ámbito interamericano, dice que la CADH dispone que, establecida la violación de un Derecho, la CIDH debe disponer "que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada" (art. 61).

A partir de esta norma, la Corte IDH ha construido el deber estatal de reparación integral (*restitutio in integrum*) a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, éste emana de la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la CADH (Corte IDH, 1988).

Indica que el primer caso contencioso que arribó a las puertas de la CIDH en el que se debatió la *restitutio in integrum* fue Velásquez Rodríguez c/ Honduras. En éste se puso en tela de juicio la responsabilidad internacional de Honduras respecto a la desaparición forzada de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez. Concluyó con sentencia de fecha 21 de julio de 1989.

En sus líneas la CIDH indicó "La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (*restitutio in integrum*), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción



produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral”.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una de sus sentencias más antiguas, ha establecido que: “Es un principio de Derecho internacional, que la jurisprudencia ha considerado “incluso una concepción general de derecho”, que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. La indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo (...) La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (*restitutio in integrum*), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez. Indemnización Compensatoria (art. 63.1 Convención americana de Derechos Humanos)).

De esta manera, dice que tanto el sistema universal como el interamericano reconocen un derecho a la reparación integral, la cual incluye la indemnización pecuniaria de todos los perjuicios económicos, aunque no se agota en ella. Opinión que es dice es compartida por nuestra excelentísima Corte Suprema: “(...) Por otra parte, la reparación integral del daño no se discute en el ámbito internacional, y no sólo se limita a los autores de los crímenes, sino también al mismo Estado. La normativa internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, pues, sin duda, siempre ha existido, evolucionando las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su



declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho quebrantado". (Excelentísima Corte Suprema, Considerando Octavo, Fallo recurso de casación en el fondo, de fecha 13 de abril de 2015. Rol 20.288-14).

Lo señalado, en orden a la necesidad de brindar una reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, aparece en sintonía con lo que se estima debiera ser la finalidad del sistema de protección internacional e derechos humanos "Esto no es una cuestión menor, dado que este paulatino y constante avance en la materia refuerza cada vez más la idea de que la finalidad principal que debe perseguir un sistema de protección internacional de derechos humanos no es declarar la responsabilidad internacional de un Estado, sino que lo central es apuntar principalmente a la plena reparación de quien o quienes resultaron víctimas de la acción u omisión imputable a un Estado" (ROUSSET SIRI, Andrés Javier. "El concepto de reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", Revista Internacional de Derechos Humanos / ISSN 2250-5210 / 2011 Año I - N 0 1 [www.revistaidh.org](http://www.revistaidh.org))

Dijo que el concepto de reparación integral que, en nuestro país, sería conteste con el "Principio de la Reparación Integral del Daño": "(...) a partir del artículo 2329 del Código Civil, que dispone que "todo daño que pueda ser atribuido a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta", se ha desarrollado el denominado "Principio de la Reparación Integral del Daño", el cual se traduce en que todo daño debe ser reparado y en toda su extensión, es decir, el objeto de la reparación es poner al demandante en la misma situación en que se encontraría si no hubiese víctima del daño causado por el hecho del demandado". (Excelentísima Corte Suprema, Considerando Duodécimo,





Fallo recurso de casación en el fondo, de fecha 28 de marzo de 2013. Rol 3844-2010).

D. EN CUANTO AL DAÑO MORAL

Señaló que tradicionalmente la jurisprudencia de nuestros tribunales adscribió a una definición restrictiva de daño moral, la que comúnmente se identificaba con la expresión latina *pretium doloris* o "precio del dolor", en la que se definía al daño moral como el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física, en sus sentimientos o afectos o en su calidad de vida.

Sin embargo, *Pretium doloris* no es más que un tipo de daño moral. En palabras del Marcelo Barrientos Zamorano, profesor de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile "Consideramos que la expresión "daño moral" se relaciona con un concepto jurídico indeterminado mucho más amplio hoy que el simple *pretium doloris*, que no es sino una especie más de daño moral. Esta expresión sería conveniente dejarla a un lado como expresión válida para este daño inmaterial. (...) no todo daño extrapatrimonial es *pretium doloris*, aunque todo *pretium doloris* sí es un daño extrapatrimonial, hay una relación más bien de género a especie." (BARRIENTOS ZAMORANO, Marcelo. "Del Daño Moral al Daño Extrapatrimonial: La Superación del *Pretium Doloris*". Revista Chilena Derecho [online]. 2008, vol.35, n.1 pp.85-106).

Así lo ha reconocido nuestra excelentísima Corte Suprema "En resumen, la doctrina y jurisprudencia prefieren ampliar la noción de daño resarcible a la lesión o afectación, sea de un derecho subjetivo reconocido formalmente, sea de un interés en la satisfacción de necesidades o bienes humanos de carácter privado." (Excelentísima Corte Suprema, Considerando Sexto, Fallo recurso de casación en el fondo, de fecha 23 de enero de 2018. Rol 10649-15).



En igual sentido, "Que en lo relativo a la petición de daño moral cabe tener presente que esta Corte pronunciándose acerca de la naturaleza del daño moral en los autos Rol N° 2073-2009, caratulados "Mellao y otros con Fisco de Chile" señaló que: "a fin de resolver este capítulo del recurso, es necesario determinar previamente la naturaleza del daño moral. Si bien no existe un concepto unívoco de lo que se entiende por tal, su acepción más restringida se relaciona con el pesar, dolor o aflicción que experimenta la víctima y que se conoce como *pretium doloris*. Sin embargo, esta visión ha dado paso, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, a considerar una concepción más amplia de tal concepto, a fin de reparar todas las especies de perjuicios morales y no sólo el *pretium doloris*, toda vez que en cada una de ellas hay atentados a intereses extrapatrimoniales diversos". (Excelentísima Corte Suprema, Considerando Décimo quinto, Fallo recurso de casación en el fondo, de fecha 28 de marzo de 2013. Rol 3844-2010).

De allí que sea más acertado definir el daño moral en un sentido amplio, como la lesión a los intereses extrapatrimoniales de la víctima, de esta forma es posible comprender en la reparación todas las categorías o especies de perjuicios morales (y no sólo el *pretium doloris*).

La profesora Carmen Domínguez Hidalgo ha manifestado sobre el punto: "Estamos con aquellos que conciben el daño moral del modo más amplio posible, incluyendo allí todo daño a la persona en sí misma física o psíquica, como todo atentado contra sus intereses extrapatrimoniales. Comprende pues el daño moral todo menoscabo del cuerpo humano, considerado como un valor en sí y con independencia de sus alcances patrimoniales". Y agrega: "En suma, el daño moral estará constituido por el menoscabo de un bien no patrimonial



que irroga una lesión a un interés moral por una que se encontraba obligada a respetarlo". (DOMÍNGUEZ HIDALGO, Carmen. En "El Daño Moral", tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, páginas 83 y 84).

Por su parte, Enrique Barros Borie nos aporta una clasificación de tipos de intereses susceptibles de perjuicio moral: (a) Atributos de la personalidad, tales como el honor o la honra, la intimidad o la propia imagen, cuya lesión involucra generalmente aspectos patrimoniales y extrapatrimoniales; (b) Intereses relacionados con la integridad física y psíquica, tales como el dolor corporal, los perjuicios estéticos o de agrado; cualquier deterioro del normal desarrollo de la vida familiar, afectiva o sexual; los daños en la autoestima a consecuencia de lesiones o la pérdida de miembros; y los llamados perjuicios de afección, ocasionados por el sufrimiento o muerte de un ser querido. En una extensión más bien exorbitante del perjuicio afectivo, los tribunales incluso han dado lugar a daño moral por la pérdida o daño a cosas corporales; (c) Intereses relacionados con la calidad de vida en general: Constituyen lesiones a estos intereses las molestias ocasionadas en razón de la vecindad, tales como ruidos molestos, humos y malos olores, algunos daños ecológicos; muchos daños a intereses relacionados con la integridad física y psíquica afectan, asimismo, la calidad de vida de la víctima (daños de agrado, derivados de la imposibilidad o la disminución de la capacidad de disfrutar las ventajas o placeres que en circunstancias normales pueden esperarse de la vida). (Ugarte D., E. y Vicari V., A. (2001). Edición del curso de responsabilidad civil extracontractual del profesor Enrique Barros Bourie: jurisprudencia y doctrina. Disponible en <http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/114777>)



Indica que, lo cierto es que más allá de cualquier conceptualización, en el caso del demandante y, en general, de todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestro país a contar del mismo 11 de septiembre de 1973, la lesión o violación de los derechos de las víctimas ha ocurrido en el plano de los derechos fundamentales de las personas, inherentes e inseparables de su condición humana.

Humberto Nogueira Alcalá identifica la dignidad humana como fundamento de los derechos fundamentales, refiriéndose a ella en los siguientes términos: "Ello nos lleva a la afirmación de la dignidad humana como la cualidad intrínseca, irrenunciable e inalienable de todo y a cualquier ser humano, constituyendo un elemento que cualifica al individuo en cuanto tal (...). (...) La dignidad humana constituye así el mínimo invulnerable del ser humano que el ordenamiento jurídico debe asegurar respecto de cada uno y todos los derechos fundamentales, los cuales tienen en ella su fundamento y base sustantiva, en la medida que todos ellos contribuyen a desarrollar ámbitos propios de la dignidad humana. (NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. "El Bloque Constitucional de Derechos en Chile, El Parámetro de Control y Consideraciones Comparativas con Colombia y México: Doctrina y Jurisprudencia". Estudios constitucionales [online]. 2015, vol.13, n.2, pp.301-350).

Indicó que la vida del demandante, como la de tantos otros, fue interrumpida de la forma más violenta e inhumana, siendo víctima de una serie de hechos sistemáticos y criminales por parte de los organismos de seguridad de la Dictadura Militar de la época.

En lo que respecta al daño moral y a su reparación, estas violaciones fueron sistemáticamente ejecutadas por órganos estatales en el cumplimiento de una política terrorista del Estado, lo que produjo un considerable,



indeleble, profundo, extenso y perdurable daño moral que marcó para siempre su vida, que le privó de libertad, de la compañía de su familia, de sus amigos, de sus colegas de trabajo, de sus compatriotas, del goce de una existencia plena, libre de asechanzas, de peligros, de riesgos, libre de agentes del Estado amparados en la impunidad dispuestos a violar sus derechos humanos. El dolor, el sufrimiento, el temor, la angustia, la sensación de pérdida, desarraigo, rabia, impotencia, sensación de vulnerabilidad, lo injusto y absurdo de la situación a que se vio enfrentado, configuran evidentemente un daño moral, que como hemos visto, resulta indemnizable.

Ahora bien, respecto de la prueba del referido daño moral en sede judicial, dice que tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere ser probado en juicio en tanto se tenga por acreditado el hecho ilícito que lo ha generado.

Esta jurisprudencia señala que, al momento de precisar la existencia y entidad del daño moral reclamado, por su naturaleza netamente subjetiva que surge de "la propia naturaleza afectiva del ser humano", no puedan aplicarse las mismas reglas utilizadas para la determinación de daños materiales (que son susceptibles de prueba y de determinación directa), de modo que el daño moral "queda enteramente entregado a la regulación prudencial de los jueces, tomando en consideración aspectos como las circunstancias en que se produjo y todas aquellas que influyeron en la intensidad del dolor y sufrimiento experimentado [...] y no podría ser de otro modo porque materialmente es difícil, sino imposible, medir con exactitud la intensidad del sufrimiento que provoca la muerte o intento de homicidio de un familiar en tan repudiabiles circunstancias". (Excelentísima Corte Suprema, Sentencia de reemplazo dictada por la Sala



Segunda en la causa Rol N° 1568-2017, con fecha 16 de noviembre de 2017).

Idéntico criterio al de la dogmática y la práctica judicial chilenas, se halla a nivel de la jurisprudencia internacional. En la actualidad, ya es jurisprudencia constante y pacífica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la idea de que el daño moral no requiere prueba en sede jurisdiccional.

Finalmente, y en el entendido que ninguna cifra podrá reparar todo el daño experimentado por las víctimas de violaciones a los derechos humanos, solicita se condene al FISCO DE CHILE a pagar la suma de \$500.000.000 (quinientos millones de pesos) al demandante, por el daño moral que sufrió producto de los hechos descritos en la presente demanda.

Por tanto, en mérito de lo expuesto, normas legales citadas, solicitó tener por interpuesta demanda ordinaria en juicio de hacienda, de indemnización de perjuicios, en contra del FISCO DE CHILE, ya individualizado, acogerla en todas sus partes, condenando al demandado a pagar a mi representado una indemnización por el daño moral sufrido, ascendente a \$500.000.000 (quinientos millones de pesos) o la suma o cantidad que este tribunal estime de Justicia conceder conforme al mérito del proceso, más intereses, reajustes legales desde que la sentencia cause ejecutoria, con costas.

Con fecha **14 de diciembre de 2022**, a folio 6, la parte demandada contestó la demanda de indemnización de perjuicios de autos, solicitando su completo rechazo en virtud de las siguientes defensas y excepciones:

**I.- LA DEMANDA Y CONTROVERSIA DE LOS HECHOS.**

Señaló que comparece el abogado Pablo Andrés Bussenius Cornejo, actuando en representación convencional de don ALEJANDRO CONSTANTINO FERRER FERNANDEZ, e interpone demanda de indemnización de



perjuicios en contra del Fisco de Chile, solicitando que éste sea condenado a pagar una reparación pecuniaria del daño moral sufrido con motivo según sus dichos de haber sido víctima de detención y violencias por motivos políticos, en los años 1973 a 1976 por agentes del Estado.

Indica que invocan como fundamento jurídico los artículos 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República; 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 5 y 63 de la "Convención Americana de Derechos Humanos" o "Pacto de San José de Costa Rica" y en general el complejo normativo denominado "Derecho Internacional de los Derechos Humanos", todo lo cual configuraría una responsabilidad civil extracontractual pecuniaria del Estado no sujeta a extinguirse por prescripción y no cumplimentada aún, hasta estas fechas, en concepto del actor, mediante la reparación suficiente de la que sería titular.

Sin embargo, dice que el demandante don Alejandro Constantino Ferrer Fernandez, no se encuentra incluido en los registros de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, denominada Comisión Valech.

En este orden, la marginación del actor del proceso de justicia transicional que Chile adoptó para identificar a las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado, implica igualmente que se ha excluido de los derechos y consecuencias jurídicas que tiene la inclusión en la nómina de la así llamada Comisión Valech. Una de las consecuencias jurídicas relevantes para este litigio en particular es que, a diferencia de aquellos casos en que los demandantes figuran en el listado de víctimas de prisión política y tortura, en este caso el Estado no ha reconocido como





ciertos los hechos ni demás antecedentes que sirven de base al relato del demandante.

Por esta razón es que su parte controvierte expresamente los hechos en que el demandante funda la demanda y muy concretamente en relación a la forma en que se desarrollaron los hechos que la afectaron y en los que radica su pretensión indemnizatoria, sin que entonces pueda estarse al mérito del Informe transicional indicado, por la sencilla razón que el nombre del actor no figura en dicho listado.

Se agrega a lo anterior, como grave defecto de la demanda, que no cita ni existe pronunciamiento judicial alguno que haya declarado que el actor fue, efectivamente, víctima de un delito de lesa humanidad que le haya considerado a su vez víctima de violaciones a los derechos humanos.

## II.- DEFENSA FISCAL. -

### II.1.- FALTA DE LEGITIMACION ACTIVA DEL DEMANDANTE.

Dice que al hilo de lo anterior, consta que don Alejandro Constantino Ferrer Fernández comparece a estrados, conforme indica en su demanda, en la calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos, por la detención y violencia que habría sufrido.

Sin embargo, y tal como ya fue advertido, el actor no figura como víctima de prisión política y tortura, en ninguno de los informes emitidos por la Comisión Valech, en diciembre de 2004, julio de 2005 ni agosto de 2011.

Entonces, dice que no teniendo la calidad de víctima reconocida por el Estado, carece de legitimación activa para demandar al Fisco de Chile.

En efecto, el Estado de Chile consagró un sistema institucional de reconocimiento a las víctimas de prisión política mediante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura ("Comisión Valech I"), y posteriormente, con el trabajo realizado por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos



Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura ("Comisión Valech II"), con la finalidad de identificarlos y hacerlos titulares de los beneficios contemplados por las leyes de reparación, en el contexto de la justicia transicional para las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.

De este modo, indica que el demandante al pretender indemnización por daño moral por hechos ocurridos hace décadas, sin haber sido reconocida por ninguna de las comisiones antedichas, carece de la legitimidad para interponer la acción de autos, pues ésta la tendrían sólo aquellas víctimas que efectivamente fueron reconocidas por los mecanismos institucionales dispuestos por el Estado para estos efectos.

II.2.- EN SUBSIDIO, IMPROCEDENCIA DE LAS INDEMNIZACIONES DINERARIAS

DEMANDADAS POR LIMITACION DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL. -

1) El caso debe analizarse a la luz de la justicia transicional. La indemnización solicitada en autos se desenvuelve en el marco de violaciones a los derechos humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la Justicia Transicional, tanto en el Derecho Interno como en el Internacional. En efecto, sólo desde esa óptica pueden analizarse y comprenderse los valores e intereses en juego en materia indemnizatoria. Ello porque en este ámbito se ha de atender tanto a la necesidad de que la sociedad reconozca los errores del pasado para que éstos no se repitan en el futuro, como a la necesidad de decidir la forma en que se inserta la reparación de víctimas y, en general, de toda la sociedad en una política amplia y de contornos temporales precisos.

Así, dice que no es extraño que muchas de los procesos de reparación privilegien a algunos grupos en desmedro de otros; se compensen algunos daños y se



excluyan otros; se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño; o, como es este el caso, se establezcan ciertos períodos determinados para presentar los antecedentes que sirven de fundamento a la reclamación.

En este escenario, la ley 19.992 ha constituido un esfuerzo trascendental de reparación, pues mediante ella se hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a las víctimas de prisión política y tortura mediante prestaciones en dinero -preferentemente en cuotas mensuales- con lo que permitió y permite que numerosas víctimas, obtengan mes a mes una reparación monetaria, sin que por ello el Estado deje de cumplir con sus otras obligaciones de interés público. Esta forma de pago ha significado un monto en indemnizaciones dignas, que han permitido satisfacer económicamente el daño moral sufrido por muchos.

En términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de:

a) Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech);

b) Bonos: la suma de \$41.910.643.367- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; y

c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.-

d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737-

En consecuencia, señala que a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-

En suma, dice que la pretensión económica demandada es improcedente porque en la especie, existe un sistema



legal de reparación pecuniaria para el que se estableció un procedimiento legal que, dentro de determinados plazos, reunió antecedentes y elaboró un listado de víctimas de prisión política y tortura que luego fueron incluidas en un complejo sistema reparatorio. No puede pretenderse, como alega el demandante, que su omisión exija del Estado una respuesta que genere reglas especiales en los mecanismos de justicia transicional.

Igualmente debe considerarse que no pueden aplicar aquí los mecanismos y estándares regulares de responsabilidad del Estado. El contexto de la justicia transicional, en el que se insertan este tipo de causas, es un contexto especialísimo en el que el Estado desarrolla una política de reparación a fin de superar, en la medida de lo posible, los dolores del pasado. Por eso en los diversos países del mundo donde se han llevado adelante este tipo de políticas, se aplican reglas especiales justificadas en la excepcionalidad de la situación.

Esta realidad excepcional es la que impide que se apliquen a hechos como los que se narran en la demanda, las disposiciones regulares en materia de responsabilidad del Estado.

Estas últimas no pueden sobreponerse a las reglas excepcionales propias de la justicia transicional pues el derecho a reglamentado una vía especial para una situación excepcional. Pretender aplicar los estándares regulares de responsabilidad civil por daños a una situación tan excepcional como la que nació en Chile al amparo de medidas propias de la justicia transicional, implica igualar, en sus fundamentos y efectos, un mecanismo reparatorio propio de la justicia transicional con aquel que opera en la regularidad de los casos. Hacerlo desconoce que el Estado ha optado por un camino especial de reparación que debe ser resguardado.



2) Objetivos e importancia de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

Manifestó que en el contexto de lo que se ha anotado, es relevante destacar el trabajo de las comisiones convocadas por el Estado en dos oportunidades para recibir antecedentes y promover políticas de reparación. Todo ello con el objeto de mostrar el esfuerzo estatal y la especificidad de las medidas propias de la justicia transicional que, como se ha dicho, impiden someter el caso que se analiza a los criterios regulares de responsabilidad del Estado.

a) Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (en adelante también "Comisión Valech I") fue establecida mediante Decreto Supremo (Interior) N° 1.040, publicado en el Diario Oficial con fecha 11 de noviembre de 2003, donde se creó, como un órgano asesor del Presidente de la República, la "Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura", en el marco de la propuesta gubernamental en materia de derechos humanos, denominada "No hay mañana sin ayer", del ex Presidente Sr. Ricardo Lagos Escobar. En su artículo primero se estableció que la referida Comisión -que posteriormente se denominó "Comisión Valech" en reconocimiento a su presidente, Monseñor Sr. Sergio Valech Aldunate- tuvo por objeto exclusivo: Artículo primero: [...] "determinar, de acuerdo a los antecedentes que se presenten, quiénes son las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990."

Expuso que para cumplir su cometido, se establece que: (artículo quinto) "La Comisión recibirá, dentro del plazo que ella misma fije, los antecedentes que



proporcionen los interesados. La Comisión podrá realizar todas las actuaciones que estime pertinentes para cumplir su cometido, tales como recibir o requerir de las agrupaciones de víctimas, de las organizaciones de defensa de derechos humanos y de asistencia humanitaria, y de organismos intergubernamentales o no gubernamentales, los antecedentes que en su oportunidad pudieren haber reunido.”

Luego de ello, el deber de la Comisión será (Artículo sexto): “[...] elaborar un informe lo más completo posible de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, reuniendo los antecedentes aportados por los interesados que permitan acreditar de manera fehaciente dichas circunstancias.”

a) La Comisión La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (en adelante “La Comisión”), definida como un órgano asesor del Presidente de la República, que contaría con el apoyo técnico y administrativo del Ministerio del Interior para el desarrollo de la misión encomendada, estuvo integrada por ocho personas, nominadas por el Presidente de la República, ya mencionadas en el acápite anterior. Las labores de los miembros de la Comisión las desempeñaron ad honorem.

b) Procesos de trabajo

La Comisión desarrolló su trabajo mediante la realización de tres procesos: recepción de antecedentes, análisis de casos conforme los antecedentes recopilados, y calificación propiamente tal.

c) Recepción de antecedentes

Su objetivo era recibir los antecedentes que presentaran, en forma voluntaria, las personas que consideraban haber sufrido prisión o tortura por motivos políticos en el período que cubría el mandato de la Comisión.



La operación de este proceso estuvo bajo la responsabilidad del Área de Atención de Público. Para ello, se realizan las siguientes actividades:

i. Solicitud de atención

El proceso se inicia con el retiro de la Ficha de Antecedentes por parte de los interesados desde los puntos en que ésta se encuentra disponible. Una vez que las personas tenían en su poder este documento, debían proceder a llenarla en cuanto les fuera posible.

Posteriormente, debía solicitarse una entrevista, lo que debía hacerse en forma personal. Por tanto, los antecedentes o informaciones de respaldo sólo podían ser presentados por la víctima, la que debía certificar su identidad mediante una fotocopia de la cédula de identidad. En caso de fallecimiento o imposibilidad grave de la víctima, podían concurrir sus familiares directos acreditando tales circunstancias.

ii. Entrevista

En el informe, se resalta que la entrevista tenía como objetivos "acoger a la persona, escuchar su motivación para declarar, obtener la información y testimonio correspondientes, recibir los documentos de respaldo que estuvieren en condiciones de aportar".

Además, se indica que, para cumplir el propósito anterior, los profesionales del Área de Atención de Público que realizaron dichas entrevistas en todo el país recibieron orientaciones y recomendaciones destinadas a facilitar la creación de una atmósfera de respeto y confianza, para generar un ambiente adecuado para la entrega de la información o antecedentes y garantizar su reserva y confidencialidad.

Por otro lado, en función del cumplimiento de las tareas asignadas dentro del plazo de funcionamiento que otorgaba el mandato de la Comisión, se consideró un promedio de 60 minutos para cada entrevista, aunque este





tiempo podía extenderse dependiendo de las características del caso.

Se destaca que el concepto de reserva fue central en el trabajo general de la Comisión y, por tanto, de la entrevista. Ello, en concordancia con lo establecido en el artículo 5°, inciso 4° del D.S. 1.040, que establece que "todas las actuaciones que realice la Comisión, así como todos los antecedentes que ésta reciba, tendrán el carácter de reservados, para todos los efectos legales".

Para los efectos del registro de la información, la Comisión elaboró una Ficha de Ingreso de Preso Político y Torturado, que junto con la entrevista fueron los instrumentos básicos para recoger los antecedentes. Esta ficha recogía información sobre los siguientes aspectos:

- Identificación del afectado: nombre completo, sexo, RUN, fecha de nacimiento, estado civil, nacionalidad, ocupación a la fecha de los hechos, ocupación actual, antecedentes políticos y sociales al momento de la primera detención y domicilio actual.

- Organismos en los que fue atendido o conocieron los hechos: a falta de éstos, nombres de testigos.

- Datos de la detención.

- Características de la privación de libertad.

- Antecedentes de tortura: detallando recintos de reclusión, breve relato y efectos

- Acciones interpuestas a favor del denunciante (a la época).

- Documentos: registro de los que entregó acompañando la ficha.

- Observaciones: aquellas que estimara pertinentes el profesional que realizaba la entrevista.

El informe señala que la calidad de los datos registrados en la ficha y corregidos o complementados en la entrevista eran un aspecto clave para facilitar el posterior proceso de calificación. Por lo tanto, en la entrevista se trataba de obtener la máxima información



que los comisionados requerían para establecer la admisibilidad y calificación del caso.

Se especifica que, para ello, los profesionales debían solicitar a la persona que expusiera los hechos en forma resumida, tomando nota escrita de los datos que ésta brindara espontáneamente, sin interrupciones o preguntas ampliatorias, salvo en el caso de que el mensaje no hubiese sido comprendido. Sólo después de la narración de los hechos se debía hacer las preguntas necesarias para ampliar, ratificar o rectificar lo declarado, con el fin de disponer de la mayor cantidad de datos precisos para facilitar su calificación posterior. Entonces, si de la información inicial se podía concluir claramente que se trataba de un caso fuera del mandato de la Comisión, el entrevistador debía explicar al declarante las razones por las que no era posible admitirlo y calificarlo, orientándolo sobre las instituciones estatales o privadas a las que podía dirigirse.

No obstante lo anterior, si la persona insistía en entregar su testimonio y la descripción de la situación permitía tener claras presunciones de violación de sus derechos humanos, éste era recogido y presentado a la consideración de los comisionados para que resolvieran al respecto.

Finalizada la entrevista, el profesional debía revisar los datos consignados en la ficha física y proceder a ingresarlos en la correspondiente ficha electrónica, pasando así a integrar la base de datos de la Comisión.

El proceso de recepción de antecedentes tenía como resultado la declaración de admisibilidad del caso y su posterior calificación.

La Comisión emitió su informe en noviembre de 2004. Tras recibir 36.035 casos, calificó a 27.255 personas



como víctimas de prisión y tortura por razones políticas.

Luego, entre noviembre de 2004 y mayo de 2005 se llevó a cabo una etapa de reconsideración, en donde quienes no habían sido calificados como víctimas pudieron presentar nuevos antecedentes para ser evaluados por la Comisión. Como resultado de esta etapa se calificaron 1.204 casos adicionales. En total, la Comisión calificó un total de 28.459 casos.

Finalmente, de acuerdo con el mandato del artículo séptimo del DS N° 1.040, la Comisión quedó inmediatamente disuelta tras cumplir con su cometido y poner a resguardo los antecedentes recabados.

b) Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.

Indicó que la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (en adelante también "Comisión Valech II") fue creada por la ley N° 20.405, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esta nueva Comisión fue establecida con la finalidad de "abrir un nuevo plazo para el reconocimiento de las víctimas que no se presentaron o no fueron reconocidas por la Comisión Rettig, por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación o por la Comisión Valech". Es decir, por ley se reabrieron procesos de calificación anteriores.

El mandato de la Comisión fue definido en el artículo 3° transitorio de la ley N° 20.405 en los siguientes términos: "Artículo 3". El Presidente de la República establecerá una Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, en adelante "la Comisión", cuyo objeto exclusivo será calificar, de acuerdo a los antecedentes que se



presenten y para el solo efecto de esta ley, a las siguientes personas:

a. Aquellas que, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, hubiesen sufrido privación de libertad y/o torturas por razones políticas. En ningún caso la Comisión podrá calificar la situación de personas privadas de libertad en manifestaciones públicas, que fueron puestas a disposición de los tribunales de policía local o de algún tribunal del crimen por delitos comunes y luego condenadas por estos delitos. Las personas que hubiesen presentado sus antecedentes a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior, que no hubieren sido calificadas favorablemente, podrán presentar su postulación nuevamente, si acompañan nuevos antecedentes.

b. Aquellas que, en el período señalado precedentemente, hubieren sido víctimas de desaparición forzada o correspondieren a ejecutados políticos, cuando aparezca comprometida la responsabilidad del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio; como, asimismo, los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos. Estas personas no podrán haber sido individualizadas en el Volumen Segundo del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por el decreto supremo N° 355, de 1990, del Ministerio del Interior, ni por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la ley N° 19.123, a menos que acompañen nuevos antecedentes".

La Comisión inició sus funciones el 17 de febrero de 2010 y emitió su informe el 18 de agosto de 2011. Tras recibir 622 solicitudes de calificación sobre detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y 31.831 solicitudes de calificación sobre víctimas de prisión



política y tortura, la Comisión reconoció como víctimas a 30 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y 9.795 víctimas de prisión política y tortura.

Al igual que su predecesora, dijo que esta Comisión se refirió expresamente en su Informe a los casos que no lograron ser calificados como víctimas. Al respecto, señaló que las solicitudes no aprobadas corresponden a casos que la Comisión estimó fuera de su mandato o casos cuyos antecedentes no fueron suficientes para formar convicción:

"Fue así como los allanamientos, situaciones de represión masiva con ocasión de las protestas en la década de los '80, denuncias de prohibición de ingreso a Chile durante la dictadura militar, amedrentamientos por parte de agentes del Estado, situaciones de violencia física o psicológica ejercida de modo colectivo sobre familias, grupos o comunidades, no fueron calificadas en la medida que no se denunciara y acreditara la privación de libertad, como está expresamente señalado en la ley.

La falta de antecedentes suficientes se debió en parte a que muchos declarantes no presentaron documentos adicionales ni testigos calificados para acreditar las situaciones denunciadas. Asimismo, un número importante de los certificados y documentos de respaldo presentados al ser cotejados con las bases de datos de la Comisión no fueron considerados suficientes para satisfacer los criterios exigidos por la ley, especialmente en relación con la motivación política y la participación de agentes del Estado en los hechos referidos".

Una vez cumplido el plazo establecido por la ley para su funcionamiento, la Comisión fue automáticamente disuelta, de conformidad con el inciso cuarto del artículo 3° transitorio de la ley N° 20.405.

A diferencia de su predecesora, aquí no se dispuso algún método de revisión de las calificaciones realizadas, por ser, a su vez, una instancia de revisión



de casos que no habían sido considerados por la Comisión Rettig, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación o por la Comisión Valech I.

### 3) Conclusión.

Expuso que en nuestro país ha llevado adelante una política de reparación que se inserta dentro de las medidas propias de la justicia transicional. Una de estas medidas es la convocatoria a la Comisión Valech I -tanto en su período original como en su etapa de reconsideración- y la Comisión Valech II, las que tuvieron como objeto el determinar de acuerdo a los antecedentes que se presentaren, quiénes fueron las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Para el cumplimiento de su objetivo, se constituyó un organismo técnico, donde mediante un detallado procedimiento y resguardando la confidencialidad de los antecedentes que aportaron cada uno de quienes comparecieron, se entregó como resultado sendos informes, en que se comunican tanto los fundamentos generales que se tuvieron en cuenta para rechazar la calidad de víctima de los ciertos comparecientes, como los listados de todos quienes fueron calificados como víctimas de prisión política y torturas por el Estado.

Hoy, tras más de una década de haber culminado el plazo para hacerse parte de esta política de reparación, el demandante intenta invocar las disposiciones del derecho común para obtener una indemnización que debió haber reclamado en su oportunidad, en el contexto de medidas adoptadas al amparo de la justicia transicional. La omisión del demandante, libre y consciente, tiene efectos jurídicos y no puede desconocer que el Estado ha



optado por un camino especial de reparación que debe ser resguardado.

II.3.- EN SUBSIDIO, EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA.

En subsidio de las excepciones precedentes, opone a la demanda la excepción de prescripción extintiva de las acciones deducidas conforme a los siguientes argumentos:

II.3.1.- Normas de prescripción aplicable.

Opone la excepción de prescripción de la acción de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2.497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse extinto el derecho del demandante por prescripción, se rechace la demanda en todas sus partes.

Conforme al relato de hechos contenido en la demanda, la detención y apremios experimentado por el actor, se produjeron entre el año 1973 y 1981 (sale en 1976 a USA y cumple pena extrañamiento por 5 años).

Es del caso que, aun comprendiendo que las particulares y difíciles circunstancias implican entender suspendida la prescripción durante el período del Gobierno Militar, esto es, a contar del 11 septiembre de 1973, por la imposibilidad o extrema dificultad de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, y prolongando este entendimiento hasta la restauración en plenitud de la normalidad constitucional, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 22 de noviembre de 2022, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil, para todos los casos, sea cual fuere la fecha de inicio de cómputo que para ello se considere.

En consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2.332 del Código





Civil, pidiendo que se acoja y se rechace íntegramente la acción indemnizatoria deducida por el actor como consecuencia de ello, por encontrarse extinta por prescripción.

Asimismo, al no haber sido incluido el demandante en los sistemas de reparación de la justicia transicional, en lo específico, los registros de la Comisión Valech, señala que no estamos en presencia de un delito de lesa humanidad, por lo que sus alegaciones respecto de una supuesta imprescriptibilidad de su acción resultan aún más improcedentes.

En subsidio, en caso que estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización, sin importar, insistimos, cual fuere la data de inicio de cómputo que se considere, y la anotada fecha de notificación de la acción civil que contesto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Reitera que, en relación con esta materia, a pesar de lo sostenido inicialmente en la demanda, no existe una sentencia penal que individualice e imponga condenas por la prisión y apremios que habría sufrido el actor.

#### II.3.2.- Generalidades sobre la prescripción.

Sobre esta materia dice que cabe recordar que la prescripción es una institución universal y de orden público.

Efectivamente, las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo



2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor es el siguiente:

“Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”.

Esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2°, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

La prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2.494, inciso 1°, del Código Civil).

La responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado, cuya es la única reparación que se reclama en autos.

Como es sabido, toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2.514 y 2.515 del Código Civil.

#### II.3.3.- Jurisprudencia sobre la prescripción.

Dijo que la sentencia del Pleno de la Excma. Corte Suprema de 21 de enero de 2013.

La Excma. Corte Suprema, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 780 del Código de



Procedimiento Civil dictó, el 21 de enero de 2013, una histórica sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

En dicha sentencia, el Máximo Tribunal en Pleno, zanjó esta controversia, señalando:

1º) Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva;

Señala al respecto el fallo:

“Octavo: Que la prescripción constituye un principio general del derecho destinado a garantizar la seguridad jurídica, y como tal adquiere presencia en todo el espectro de los distintos ordenamientos jurídicos, salvo que por ley o en atención a la naturaleza de la materia se determine lo contrario, esto es, la imprescriptibilidad de las acciones. A ello cabe agregar que no existe norma alguna en que se establezca la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales; y, en ausencia de ellas, corresponde estarse a las reglas del derecho común referidas específicamente a la materia”.

2º) Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la



imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal;

Al efecto, el citado fallo dispone:

"Cuarto: Que desde luego y en lo que dice relación con la alegación de vulneración de tratados internacionales cabe dejar establecido, en forma previa, que al tiempo de los hechos investigados no se encontraban vigentes en Chile el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que sólo vino a ser aprobado por Decreto Supremo N° 778 (RR.EE.) de 30 de noviembre de 1976, publicado en el Diario Oficial de 29 de abril de 1989, ni la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, promulgada por Decreto Supremo N° 873 (RR.EE.), de 23 de agosto de 1990, publicado el 5 de enero de 1991."

"Quinto: Que no obstante lo anterior y en la misma línea de razonamientos acerca del contenido de tratados internacionales, previo es también hacer notar que ninguno de los cuerpos normativos citados en el fallo impugnado establece la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales. Así, la propia Convención Americana de Derechos Humanos no contiene precepto alguno que consagre la imprescriptibilidad alegada por el recurrente. Además, ninguna de las disposiciones citadas en el recurso excluye respecto de la materia en controversia la aplicación del derecho nacional. En efecto, el artículo 1° sólo consagra un deber de los Estados miembros de respetar los derechos y libertades reconocidos en esa Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna; y el artículo 63.1 impone a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un determinado proceder si se decide que hubo violación a un derecho o libertad protegido."



"Sexto: Que, por su parte, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, que prohíbe a las partes contratantes exonerarse a sí mismas de las responsabilidades en que han incurrido por infracciones graves que se cometan en contra de las personas y bienes protegidos por el Convenio a que alude el artículo 131, debe entenderse necesariamente referido a infracciones del orden penal, lo que resulta claro de la lectura de los artículos 129 y 130 de dicho Convenio que aluden a actos contra las personas o bienes citando al efecto homicidio intencional, tortura o tratos inhumanos, incluso experiencias biológicas, el causar de propósito grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un cautivo a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga o privarle de su derecho a ser juzgado regular e imparcialmente al tenor de las prescripciones del Convenio."

"Séptimo: Que, finalmente, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968, que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, así como de los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto antes indicado, se refiere también y únicamente a la acción penal. En efecto, en el artículo IV establece que los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro modo, no se aplique a los crímenes antes indicados."

3º) Que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en



esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto;

Así, junto al considerando octavo antes citado, dispone el fallo en su considerando décimo que:

"Décimo: Que de acuerdo a lo anterior, en la especie resulta aplicable la regla contenida en el artículo 2332 del mismo Código, conforme a la cual las acciones establecidas para reclamar la responsabilidad extracontractual prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto".

4º) Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado (detención de los demandantes en este caso), sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia.

Las sentencias anteriores y posteriores al citado fallo<sup>11</sup> no hacen más que reiterar la misma doctrina, constituyendo jurisprudencia contundente en la materia, acogiendo las argumentaciones hechas valer por esta defensa, lo que solicitamos se tenga especialmente en consideración al momento de resolver la presente litis, tal como ha resuelto el Pleno de la Excm. Corte, en sentencia de fecha 21 de enero de 2013 que acogió la aplicación de la institución de la prescripción en materias como la de autos.

II.3.4.- Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria.

La indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es



netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción.

Sobre el particular debe considerarse como, en forma reiterada, se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la reiterada jurisprudencia, que en la especie se han ejercido acciones de evidente contenido patrimonial, que persiguen hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

En efecto, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción (incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos), por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria, que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

II.3.5.- Normas contenidas en el Derecho Internacional.

Finalmente, en cuanto a la alegación contenida en la demanda vinculada a la imprescriptibilidad de la acción para obtener la reparación por los daños reclamados conforme al derecho internacional de los derechos humanos, mi parte se hará cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.





En efecto, la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad", aprobada por Resolución N° 2.391 de 26 de Noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1° letras a) declara imprescriptibles a "los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero cabe señalar -tal como lo ha reconocido la Excm. Corte Suprema- que en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

Los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal.

La Resolución N° 3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada "Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad", se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

La Convención Americana de Derechos Humanos, invocada en la demanda fuerza a señalar que, sin perjuicio que la aplicación de dicho Tratado no es atingente al caso sub-lite puesto que, en la época en que acontecieron los hechos, no estaba vigente, dado que



su promulgación se produjo por Decreto Supremo N° 873 de 1990, publicado en el Diario Oficial el 5 de enero de 1991; ninguna duda cabe que la citada normativa no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria.

En relación a esta Convención dice que debe destacarse que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Por otra parte, el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultando exclusivamente a dicha Corte Interamericana para imponer condenas de reparación de daños y, por lo mismo, no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción en Chile. La norma señala:

“63.1.- Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de sus derechos o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

Es decir, el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a nuestros



Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

Agrega que el planteamiento la defensa fiscal ha sido reconocido por la Excma. Corte Suprema. En efecto, dice que la Excma. Corte ha desestimado la aplicación de esa normativa en diversos fallos, como lo ha establecido conociendo del recurso de casación interpuesto en los autos ingreso N° 1.133-06, caratulados "Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile", de 24 de julio de 2007, que en sus considerandos vigésimo quinto y vigésimo sexto desestimó el recurso de casación de la demandante por considerar inaplicables las disposiciones citadas según se pasa a señalar:

"VIGESIMO QUINTO: Que, asimismo el recurso ha imputado a la sentencia que cuestiona haber transgredido, al aceptar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco, diversas normas pertenecientes al Derecho Internacional de Derechos Humanos, que consagran la imprescriptibilidad en materias relativas a la protección de estos derechos, mencionado, a tal efecto, en primer término, el ordenamiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- promulgado mediante Decreto Supremo N° 873, publicado en el Diario Oficial de 5 de enero de 1991."

"VIGÉSIMO SEXTO: Que semejante reproche aparece desprovisto de fundamentación atendible, puesto que, si bien dicho tratado tiene la fuerza normativa que le reconoce el artículo 5° inciso 2° de la Carta Fundamental, su vigencia arranca de una época posterior en el tiempo a aquélla en que ocurrieron los hechos objeto del actual juzgamiento, de modo que sus disposiciones no les resultan aplicables.

Por lo que toca específicamente al artículo 63 -única disposición del Pacto que el recurso presenta como vulnerada - basta una somera lectura de su texto para comprender que en él se plasma una norma imperativamente



dirigida a la Corte Internacional de Derechos Humanos, y que ninguna correspondencia guarda con la materia comprendida en el recurso”.

Lo mismo aconteció en la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, acogiendo un recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco, en la causa “Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile”, autos ingreso N° 4.067-2006, en fallo de fecha 29 de octubre de 2007.

En el mismo sentido se han pronunciado reiterados fallos de la Excma. Corte Suprema y es un planteamiento que, por último, no ha estado ausente tampoco del tribunal de alzada de la propia jurisdicción:

“1) Que se ha ejercido una acción de indemnización de perjuicios pretendiendo hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado. Por ello corresponde aplicar las disposiciones que sobre tal materia contempla el Código Civil, a cuyo efecto debe considerarse que no existen normas que establezcan la imprescriptibilidad de las acciones destinadas a hacer efectiva de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales. En tal sentido proceder aplicar el artículo 2.497 del Código Civil, que dispone: “Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”.

Igualmente, dice que es aplicable la regla contenida en el artículo 2.332 del mencionado Código, porque la acción deducida para obtener la reparación de los daños causados fue ejercida cuando ya estaba vencido en exceso el plazo de cuatro años establecido en el precepto legal indicado. 2) Que las normas de carácter internacional invocada por la actora y acogida por la sentencia de primer grado, no se encontraban vigentes en Chile a la



época de ocurrencia de los hechos en que se funda la demanda. En efecto, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica del año 1969, fue promulgado por Decreto Supremo N°873 del Ministerio de Relaciones Exteriores el 23 de agosto de 1990 y publicado en el Diario Oficial el 05 de enero de 1991.

3) Que, en similar orden de ideas, corresponde señalar que al dictarse el Decreto Supremo citado, el Estado de Chile, incluyó dos declaraciones y expresó "Al formular las mencionadas Declaraciones, el Gobierno de Chile deja constancia que los reconocimientos de competencia que ha conferido se refieren a hechos posteriores a la fecha del depósito de este Instrumento de Ratificación o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990...". Por tal motivo, si bien es cierto que el tratado en referencia tiene la fuerza vinculante que le otorga el artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política, es incuestionable que su vigencia es posterior a aquélla en que acaecieron los hechos que sirven de fundamento a la acción por lo que no son aplicables sus preceptos al litigio de autos. 4) Corresponde, también, señalar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también invocado en la presente controversia, no resulta aplicable a ella, pues, si bien fue promulgado por Decreto Supremo N°778 del Ministerio de Relaciones Exteriores de 30 de noviembre de 1976, su publicación en el Diario Oficial se hizo el 29 de abril de 1989, fecha en que comenzó a regir acorde lo dispuesto en el artículo 6° del Código Civil, debiendo descartarse que el mismo no contiene disposición alguna que permita sostener la imprescriptibilidad de las acciones civiles patrimoniales, destinada a obtener el reconocimiento de la responsabilidad aquiliana del Estado o de sus órganos institucionales, como tampoco consigna precepto alguno que consagre la imprescriptibilidad invocada por el



actor. Por tales razones, el disidente fue la opinión de acoger la expresión de fondo de prescripción de la acción impetrada por el Fisco de Chile y rechazar la demanda”.

Dice que no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, US. no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Con el mérito de lo expuesto precedentemente dice que se deberá rechazar la demanda por encontrarse prescritas la acciones que se entablan.

### III.- EN CUANTO AL DAÑO E INDEMNIZACIONES RECLAMADAS

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, procede a formular las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y del excesivo monto pretendido, lo que resulta improcedente según se señala.

Indica que, según señaló con anterioridad, el actor no se encuentra reconocido como víctima de violencia política en la Comisión Valech, ni tampoco cuenta con una decisión jurisdiccional que acredite la calidad que invoca, por lo que deberá rendir prueba en torno a la afectación moral que le supuso la vulneración de garantías experimentada y la manera en que ésta implicó una alteración efectivamente disvaliosa de su curso vital, lo que expresa que, en la medida que se sostenga que existieron hechos imputables a agentes estatales que generaron un efectivo perjuicio a los atributos



esenciales de la personalidad del actor, se deberá aparejar prueba que permita sostener la convicción jurisdiccional en torno a este punto.

Regulación de la indemnización por daño moral.

Con relación al daño moral, y sin perjuicio de las consideraciones precedentemente expuestas, hace presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales.

Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria, tal y como lo reconoció el propio Presidente de la República con motivo de la entrega del informe de la Comisión Valech.

En términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

Tratándose del daño puramente moral, la finalidad descrita no es alcanzable de ninguna manera, así como tampoco puede plantearse que compense en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél. El daño moral no se borra por obra de la indemnización. La pérdida o lesión producida por él permanece cualquiera sea la magnitud de la suma de dinero que se perciba.

Por ende, señala que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el





daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva, como ocurre precisamente con las prestaciones otorgadas en virtud de las leyes reparatorias ya invocadas o con las facilidades, por ejemplo, educacionales, a las que ellas dieron acceso.

Idéntica consideración, esto es, el carácter personalísimo de la afectación de los atributos morales de la persona, imposibilitan del todo pretender igualar situaciones que, lógicamente, son completamente diversas.

Señala que no se trata, por cierto, de emitir una suerte de apreciación valorativa, íntima, de los eventuales padecimientos experimentados por el demandante, sino que simplemente de hacer patente la dificultad de alcanzar una ponderación estandarizada en este género de materias y la improcedencia de igualarlas sin más, haciendo tabla rasa del constitutivo esencial de los daños morales.

Ha dicho la Excma. Corte Suprema: "Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido".

Así, "el juez al avaluar este daño, debe proceder con prudencia, tanto para evitar los abusos a que esta reparación puede dar origen, cuanto para impedir que se transforme en pena o en un enriquecimiento sin causa para quien lo demanda".

Por otra parte, dice que es dable advertir que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se



ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión y naturaleza del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

En tal sentido, declara que la cifra pretendida de \$500.000.000.- en la demanda como única y exclusiva compensación del daño moral, resulta por demás manifiestamente excesiva, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con extrema prudencia.

En relación con este último particular, señala que resultará del todo pertinente consignar acá que los tribunales superiores en fecha muy reciente, han declarado, además, que la constatación de la efectiva concurrencia y valoración de los perjuicios morales no se puede dar por establecida con el sólo hecho de haberse incorporado los nombres de las víctimas en las nóminas libradas por los órganos encargados de materializar los beneficios de las leyes de reparación, estableciéndose incluso que, a falta de mayor prueba, dichas pretensiones deben ser desestimadas:

“PRIMERO: Que para que haya lugar a la responsabilidad extracontractual se requiere la concurrencia de a lo menos los siguientes presupuestos: una actuación u omisión ilícita, culpable o dolosa, el daño a la víctima y la relación de causalidad entre la acción u omisión culpable o dolosa y el daño producido;

SEGUNDO: Que en lo que atañe a los perjuicios cuyo resarcimiento económico se reclama es menester, ahora, considerar que dichos menoscabos morales no resultaron de modo alguno, acreditados por los actores, sobre quienes pesaba la carga de la prueba. En efecto, pese a no encontrarse contradicho que los demandantes tuvieron la calidad de detenidos y torturados durante el Régimen Militar, situación que es reconocida en el Informe



Valech y que probablemente tales circunstancias provocaron en todos ellos algún nivel de angustia y desazón, tratándose de perjuicios personales e individuales sufridos por cada uno de ellos, lo cierto es que no se rindió prueba alguna acerca de la real existencia del detrimento extrapatrimonial efectivamente sufrido por cada los demandantes y de su envergadura, careciendo estos sentenciadores, en consecuencia, de cualquier elemento probatorio que les permita seria y responsablemente apreciar la efectiva existencia de tal daño moral y su extensión. Corrobora lo concluido precedentemente y la exigencia que esta Corte echa en falta a los requisitos de la responsabilidad extracontractual, la sola constatación de que precisamente tales elementos fueron entendidos como objetos a probar en el punto 2° de la interlocutoria de prueba;

TERCERO: Que luego de lo dicho y como corolario de lo que se viene razonando, no habiéndose probado el daño alegado ni su envergadura, se impone necesariamente concluir que la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual intentada, deberá forzosamente rechazarse”.

Este último razonamiento, señala que refleja la especial situación de la demandante, que no se encuentra reconocida por la Comisión Valech ni cuenta con una decisión jurisdiccional que sustente sus dichos.

Por lo expuesto, solicita tener por contestada la demanda civil deducida en autos y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar las acciones deducidas en todas sus partes, con costas, o en subsidio, rebajar los montos indemnizatorios pretendidos en razón de los fundamentos que se dejan enunciados en el cuerpo de esta presentación.



Con fecha **22 de diciembre de 2022**, a folio 14, la parte demandante, **evacúa el traslado de la réplica**, señalando lo siguiente:

I) EN CUANTO A LA FALTA DE LEGITIMACION ACTIVA DEL DEMANDANTE.

Señala que lo aseverado por la demandada en torno a que "el demandante al pretender indemnización por daño moral por hechos ocurridos hace décadas, sin haber sido reconocida por ninguna de las comisiones antedichas, carece de la legitimidad para interponer la acción de autos, pues ésta la tendrían sólo aquellas víctimas que efectivamente fueron reconocidas por los mecanismos institucionales dispuestos por el Estado para estos efectos", carece de todo respaldo normativo.

Indica que lo que habilita a su parte a demandar de indemnización de perjuicios por daño moral es la calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos del demandante y no, como erradamente sostiene el Consejo de Defensa del Estado en su contestación, la inclusión en un determinada nómina o registro.

II) EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA

A efectos de fundamentar el rechazo a la misma, es posible mencionar los siguientes argumentos:

1) Las normas del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad.

Son 2 las premisas presentes en la argumentación del Consejo de Defensa del Estado: 1) Que las acciones reparatorias, como la intentada en autos, pertenecen al ámbito patrimonial, encontrándose por tanto regidas por el Derecho Civil. 2) Que en el derecho civil se encuentra el estatuto general de responsabilidad.

Sin embargo, dice que ambas premisas se encuentran actualmente superadas. En efecto, en el estado actual del debate, no existe mayor discusión, a nivel



doctrinario ni jurisprudencial, en cuanto a que las acciones reparatorias, por su especial ámbito, tienen una naturaleza internacional o humanitaria, no patrimonial y que esta clase de delitos se sujeta a un régimen autónomo de responsabilidad estatal.

Siendo incluso posible encontrar diversos fallos en que nuestra excelentísima Corte Suprema se ha manifestado explícitamente contraria a la aplicación del código civil a la responsabilidad civil derivada de crímenes de lesa humanidad, argumentando para ello desde la especificidad propia de la materia:

“Pretender aplicar las normas del Código Civil a la responsabilidad internacional del Estado derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico resulta hoy desproporcionado, por cuanto no obstante la innegable importancia del legendario Código Civil, la evolución de las ciencias jurídicas ha permitido establecer principios y normas propias para determinadas materias, lo cual el citado Código reconoce, al estipular en el artículo 4°, que las disposiciones especiales se aplicarán con preferencia a las de este Código. De esta forma, el Código Civil es supletorio y orientador de todo el Derecho Privado y si bien el fenómeno de la codificación se plantea para los fines que don Andrés Bello explicara en su época tomando como fuente el derecho extranjero particularmente el Código Civil francés para construir un sistema integral, estructurado y coordinado de la legislación (Alejandro Guzmán, “Andrés Bello Codificador. Historia de la fijación y codificación del derecho civil en Chile”. Ediciones de la Universidad de Chile.) sin embargo, la descodificación se ha transformado en la manera empleada por el legislador para adoptar, de manera más dinámica, la forma en que adecúa a las nuevas realidades,



situaciones emergentes que no se encuentran en el sistema existente, atendidas sus finalidades y valores propios y sí en el renovado sistema de protección de los derechos humanos y en el Derecho Público en general y el Administrativo en particular, en los que han surgido principios y normas especiales a modo de decodificación material con postulados diversos y a veces en pugna con los del derecho privado regulador de las relaciones en un plano de igualdad y de autonomía de las personas para obligarse. Esta rama emergente, definida y representativa de la supremacía de la finalidad centrada en la dignidad de la persona a quien se debe servir, se aparta de aquellos postulados". (Excelentísima Corte Suprema, Sentencia de Casación de fecha 06.01.2014, dictada en los autos Rol N° 2918-2013).

Expresa que en similares términos, la más reciente jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal:

"Resulta importante traer a colación, al efecto, que el proceso de codificación en el país es temporalmente anterior a los sucesos que motivaron el surgimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya sea a través de tratados internacionales, resoluciones y demás fuentes internacionales, de modo tal que, pretender aplicar las normas del Código Civil a la responsabilidad civil derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, hoy resulta improcedente. Ello, por cuanto la evolución de las ciencias jurídicas ha permitido establecer principios y normas propias para determinadas materias, en particular, un renovado sistema de protección de los derechos que cuenta con postulados diversos y, a veces, en pugna con los del derecho privado, regulador de las relaciones en un plano de igualdad y de autonomía de las personas para obligarse. Esta rama emergente, representativa de la supremacía de



la finalidad centrada en la dignidad de la persona a quien se debe servir, plasmada en la orientación del Derecho Internacional hacia la defensa de los derechos humanos y el castigo de sus transgresiones por agentes del Estado, mediante la comisión de ilícitos de lesa humanidad, ha de primar por sobre la preceptiva anterior, surgida en un contexto que desconocía tal línea evolutiva. (SCS Rol N° 20.288-14, de 13 de abril de 2015)". (Excelentísima Corte Suprema, Sentencia de Casación de fecha 16.06.20, dictada en los autos Rol N° 34.111-19).

2) Los delitos de lesa Humanidad se sujetan a un régimen autónomo de responsabilidad estatal.

Tratándose de violaciones a los Derechos Humanos, como es el caso sub lite, señala que la responsabilidad del Estado, y más específicamente, la obligación indemnizatoria del mismo, no surge del derecho civil, sino de la interacción normativa entre reglas internas, fundamentalmente de derecho constitucional, y reglas internacionales contenidas en diversas fuentes de Derecho Internacional Público, esto último posibilitado por la remisión que hace el artículo 5 de la Constitución Política de la República.

Así como de la utilización de reglas interpretativas desarrolladas fundamentalmente por el Derecho Internacional, como son los principios de interpretación de buena fe, principio "pro homine" o "favor libertatis", interpretación evolutiva, equidad como criterio de integración e interpretación judicial, y las reglas de ius cogens, como fuente normativa y como elemento para situar las reglas convencionales de Derecho Internacional.

Régimen autónomo de responsabilidad estatal que desde el año 2015, ha venido siendo reconocido consistentemente por la jurisprudencia de nuestra excelentísima Corte Suprema, entre otros, en Sentencia





de Casación en el Fondo de fecha 23.01.2018, dictada en los autos Rol N° 31.711-17:

“Sexto: Que, por otro lado, como ya se ha esbozado, la acción civil aquí deducida en contra del Fisco, tendiente a obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados, encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado chileno a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política de la República (...)”.

Indica que en la misma línea jurisprudencial, podemos citar la más reciente jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal del país, contenida en la ya citada Sentencia de Casación de fecha 16.06.20, dictada en los autos Rol N° 34.111-19:

“Cuarto: Que, para iniciar el análisis del asunto, resultando necesario tener en consideración que la acción civil impetrada en contra del Fisco de Chile, tiene por objeto obtener la íntegra reparación de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado, que resulta plenamente procedente, conforme fluye de los tratados internacionales ratificados por Chile y de la interpretación de normas de derecho interno en conformidad a la Constitución Política de la República.

En efecto, este derecho de las víctimas y sus familiares encuentra su fundamento en los principios generales de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, la consagración normativa, en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el



inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Carta Fundamental.”.

3) De la existencia de este régimen autónomo de responsabilidad estatal se siguen determinadas consecuencias: una de ellas es que la responsabilidad del Estado que surge por violaciones a los derechos humanos no se extingue por el transcurso del tiempo.

Dice que la responsabilidad, tanto civil como penal derivada de la comisión de crímenes contra la humanidad, se sujeta a un mismo estatuto de imprescriptibilidad integral, que tiene su fuente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el que postula que todo daño acaecido en el ámbito de estos derechos, ha de ser siempre reparado integralmente, con arreglo a las normas de derecho internacional convencional, o en su defecto, del derecho consuetudinario, de los principios generales o aún de la jurisprudencia emanada de tribunales de la jurisdicción internacional.

Tanto el sistema universal como el interamericano reconocen este derecho a la reparación integral.

En el ámbito del sistema de protección universal de los derechos humanos, el derecho de las víctimas a obtener reparación, constituye un principio general del derecho internacional.

En relación con lo anterior, es posible hacer mención de los desarrollos existentes en el Derecho Internacional en materia de aplicabilidad del instituto jurídico de la prescripción a acciones judiciales para obtener reparaciones frente a graves violaciones de derechos humanos.

Desde 1989 el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias señaló, en sus Observaciones Generales respecto del artículo 19 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que las “acciones civiles de indemnización no [...]



estarán sujetas a la prescripción". (Cfr. Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Observaciones Generales sobre el Artículo 19 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, E/CN.4/1998/43, párr. 73).

El entonces Relator sobre el Derecho a la Restitución, Indemnización y Rehabilitación por Graves Violaciones a los Derechos Humanos, Theo Van Boven, en 1993 señaló que "[...] la aplicación de prescripciones priva con frecuencia a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos de las reparaciones a que tienen derecho. Debe prevalecer el principio de que no estarán sujetas a prescripción las reclamaciones de reparación por violaciones flagrantes de los derechos humanos. En este sentido, hay que tener en cuenta que las consecuencias de las violaciones flagrantes [...] son el resultado de los crímenes más odiosos que, según opiniones jurídicas muy acreditadas, no deben estar sujetos a prescripción. Además, está suficientemente probado que, para la mayoría de las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos, el paso del tiempo no ha borrado las huellas, sino todo lo contrario, pues ha provocado un aumento del estrés postraumático que ha requerido todo tipo de ayuda y asistencia material, médica, psicológica y social durante mucho tiempo". (Cfr. Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH-ONU), Informe final presentado por el Relator Especial sobre el Derecho a la Restitución, Indemnización y Rehabilitación de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 de julio de 1993, párr. 135.).

Luego, el contenido específico del derecho de las víctimas a obtener reparación fue sistematizado por el antes mencionado relator especial Sr. Theo Van Boven,



por encargo de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. En efecto, en su decisión 1995/117, de 24 de agosto de 1995, pidió al relator Especial que presentara, una serie revisada de los principios y directrices básicos en la materia a la luz de los instrumentos internacionales pertinentes en vigor. En la serie revisada y principios y directrices, se deberían tener en cuenta las observaciones recibidas de los Estados, las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, así como las secciones pertinentes del informe del grupo de trabajo sobre la administración de justicia y la cuestión de la indemnización. Concluido el trabajo, el Relator Especial presentó en la sesión 49 la serie revisada de principios y directrices, bajo el título "Principios y directrices sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho humanitario a obtener reparación", concluyendo en el acápite sobre "El derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y libertades fundamentales", la imprescriptibilidad de las acciones civiles para demandar la indemnización por el daño causado con ocasión de la violación.

El Conjunto Actualizado de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad, adoptados en 2005 por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, incluyó lo siguiente:

"Principio 23. Restricciones a la prescripción. La prescripción de una infracción penal, tanto en lo que respecta a las diligencias como a las penas, no podrá correr durante el período en que no existan recursos eficaces contra esa infracción. La prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme el derecho



internacional que sean por naturaleza imprescriptibles. Cuando se aplica, la prescripción no podrá invocarse en las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación [...]”.

“Principio 32. Procedimientos de reparación. Tanto por la vía penal como por la civil, administrativa o disciplinaria, toda víctima debe tener la posibilidad de ejercer un recurso accesible, rápido y eficaz, que incluirá las restricciones que a la prescripción impone el principio 23”. (Cfr. CDH-ONU, Diane Orentlicher, Experta independiente encargada de actualizar el Conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, E/CN.4/2005/102, 18 de febrero de 2005.)”.

Más recientemente en el año 2006, la Resolución N° 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 21 de marzo de 2006, que contiene los “Principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional”, ratificó en su artículo 6, párrafo 4, el carácter imprescriptible de las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de las violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyan crímenes en virtud del derecho internacional, cuando así se disponga en un tratado aplicable o forme parte de otras obligaciones jurídicas internacionales. Agregando a continuación en el numerando 7, que tratándose de otro tipo de violaciones que no constituyan crímenes en virtud del derecho internacional, incluida la prescripción de las acciones civiles y otros procedimientos, no deberían ser excesivamente restrictivas.

En consecuencia, señala que hoy no queda duda alguna que a la luz del Derecho Internacional General, las acciones indemnizatorias son imprescriptibles.



En el ámbito interamericano, destaca lo estatuido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente, en su artículo 63, donde se establece uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados, puesto que cuando ha existido violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar la acción con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

Concordantemente con ello, nuestra Excelentísima Corte Suprema ha sentado que en materia de delitos de lesa humanidad, los artículos 1.1. y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagran una responsabilidad del Estado sujeta al derecho internacional que no puede ser incumplida a pretexto de otros preceptos de derecho interno. El derecho común solo mantiene vigencia si no es contrario a dichas reglas.

“Sexto: (...) Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esa índole, con el consecuente deber de reparación y de mitigar las consecuencias de la violación”. (Excelentísima Corte Suprema, Sentencia de Casación de fecha 23.01.2018, dictada en los autos Rol N° 31.711-17).

Con lo señalado hasta aquí, indica es que no resultan aplicables las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles a la resolución del asunto, al estar éstas en abierta contradicción con las referidas reglas



del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que protegen el derecho de las víctimas y familiares a recibir la reparación correspondiente:

“De este modo, en el presente caso no resultan atingentes las normas del derecho interno, previstas en el Código Civil, sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, al estar en contradicción con las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que protegen el derecho de las víctimas y familiares a recibir la reparación correspondiente, estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por Chile y que, sin perjuicio de la data de su consagración y reconocimiento interno, corresponden a normas de ius cogens, derecho imperativo internacional que protege valores esenciales compartidos por la comunidad internacional que ha debido ser reconocido por los jueces de la instancia al resolver la demanda intentada. (En este mismo sentido, SCS N° 20.288-2014, de 13 de abril de 2015; N° 1.424-2013, de 1 de abril de 2014; N° 22.652-2014, de 31 de marzo de 2015; N° 15.402-2018, de 21 de febrero de 2019 y; N° 29.448-2018, de 27 de agosto 2019, entre otras). (Excelentísima Corte Suprema, Sentencia de Casación de fecha 16.06.20, dictada en los autos Rol N° 34.111-19)”.

Indica que el fallo transcrito recoge una idea común en el Derecho internacional Humanitario y en el Derecho Internacional de Derechos Humanos, consistente en que las normas basales del sistema son consuetudinarias, de tal forma que las reglas convencionales sólo vienen a consagrar imperativos jurídicos plenamente vigentes, que buscan en su positivización su mejor protección, mas no su establecimiento.

Luego, las normas de derecho internacional que consagran el derecho de las víctimas a una reparación integral constituyen un límite en sí mismas:





"Séptimo: Que estas normas de rango superior imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, en tanto éstos no pueden interpretar los preceptos de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

Por esta razón no resultan aplicables las disposiciones del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, como resuelve el fallo, pues ellas contradicen lo dispuesto en la normativa internacional, en cuanto a la ineficacia de normas internas que hagan ilusorio el derecho a la reparación de los daños ocasionados por crímenes de lesa humanidad." (Excelentísima Corte Suprema, Sentencia de Casación de fecha 23.01.2018, dictada en los autos Rol N° 31.711-17).

Luego, la prescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de crímenes de lesa humanidad infringe los artículos 26, 27 y 53 de la Convención de Viena, esta última disposición en relación a las reglas imperativas de derecho internacional o "IUS COGENS".

En efecto, dice que infringe el principio internacional de que los tratados deben cumplirse de buena fe, contenido en el artículo 26 de la Convención de Viena; el principio de derecho internacional contenido en el artículo 27 de la Convención de Viena, el que previene que los Estados no pueden invocar su derecho interno -para eludir sus obligaciones internacionales- en la especie, la de establecer responsabilidades-, que es justamente la hipótesis en que se pretende la aplicación de las reglas de prescripción contenidas en el Libro Tercero título XXXV del Código Civil, evitando de esta forma al Estado de Chile cumplir la obligación reparar una violación grave



del derecho internacional, tratándose de delitos de lesa humanidad. Dejaría de aplicar el artículo 53 de la Convención de Viena, el cual incorpora al derecho convencional las reglas imperativas de derecho internacional o "IUS COGENS": "es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general".

Para los efectos de la presente Convención (Convención de Viena), una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional e Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.

"(...) A lo anterior obliga el Derecho Internacional, traducido en Convenios y Tratados que, por clara disposición constitucional, son vinculantes, como ocurre por ejemplo y entre otros, con la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues, de hacerlo, comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, Las Constituciones Latinoamericanas, página 231)". (Excelentísima Corte Suprema, Sentencia de Casación de fecha 16.06.20, dictada en los autos Rol N° 34.111-19).

4) Otras argumentaciones presentes en la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal que declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de crímenes de lesa humanidad:

El principio de buena fe -junto al pacta sunt servanda- suele ser invocado para fundar la



obligatoriedad del derecho internacional y la integración normativa de sus fuentes:

"TRIGÉSIMO QUINTO: Que, de esta manera, a juicio de estos sentenciadores, procede acoger la acción civil deducida en autos, que tiene como objeto obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de los agentes del Estado de Chile, ya que así lo demanda la aplicación de buena fe de los tratados internacionales suscritos por nuestro país, así como la interpretación de las normas de derecho internacional consideradas ius cogens por la comunidad jurídica internacional. Así, dichas normas deben tener aplicación preferente en nuestro ordenamiento interno, al tenor de lo que dispone el artículo 5° de la Constitución Política de la República, por sobre aquellas disposiciones de orden jurídico nacional que posibilitarían eludir las responsabilidades en que ha incurrido el estado chileno, a través de la actuación penalmente culpable de sus funcionarios, dando cumplimiento de este modo a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados." (Excelentísima Corte Suprema, Sentencia de Casación dictada en los autos Rol N° 5720-2010. En el mismo sentido considerando décimo octavo de la sentencia de casación Rol N° "5436-2010).

Del mismo modo, señala que nuestra Corte Suprema ha recurrido al concepto de justicia para justificar la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de crímenes de lesa humanidad:

"Quinto: Que la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material. (...)". (Excelentísima Corte Suprema, Sentencia de Casación de fecha 16.06.20, dictada en los autos Rol N° 34.111-19).



Concepto de justicia que ha sido empleado en diversos sentidos: 1) Para afianzar la necesidad restaurativa de la reparación; 2) Para rechazar la aplicación del Código Civil y 3) Para traer a colación las reglas del Derecho Internacional. Ello, a nuestro juicio, importa que la Corte Suprema vea en la justicia tanto un criterio orientador como una herramienta de integración jurídica:

“OCTAVO: (...) En resumen, no es posible sostener la inexistencia de responsabilidad del Estado en esta clase de infracciones por la prescripción de la acción civil, porque el valor justicia que orienta el Derecho y la convivencia humana rechazan tal posibilidad, al extremo que el Derecho Internacional ha recogido el criterio que afirma que “todo daño” que sea su consecuencia ha de ser reparado.

Además, tal alegación desconoce la naturaleza del hecho que motiva la indemnización solicitada cuando reclama el sistema de responsabilidad extracontractual, porque si bien es cierto que la cuestión está desvinculada de lo meramente convencional o contractual, ello no implica que haya de hacerse aplicación de aquel régimen con elementos como la culpa y el dolo de un agente determinado. En un caso como el de la especie, su naturaleza y gravedad es lo que hace innecesario ocuparse de acreditar estos supuestos de responsabilidad en los agentes del Estado causantes directos del daño, porque inequívocamente los hechos no han podido acaecer sino como efecto de una política de Estado, y por lo tanto reiterada y sistemática de conductas lesivas a los derechos fundamentales propias de regímenes no democráticos como el instaurado en Chile el 11 de Septiembre de 1973, esto es, cuando integrantes de sus órganos de seguridad asumen con el apoyo de todo el aparato estatal políticas represivas conculcando derechos fundamentales de sus opositores -hombres y



mujeres particularmente jóvenes-, mediante torturas físicas y psicológicas, abusos sexuales, desapariciones y ejecuciones forzadas como práctica institucional entre otros graves atentados ocultos a los ojos de mucha gente y de la jurisdicción hasta muy avanzada la democracia. Objetivo de verdad que junto a los de justicia, paz y reparación hacen inaplicables las normas sobre responsabilidad civil del código del ramo.” (Excelentísima Corte Suprema, Sentencia de Casación dictada en los autos Rol N° 2080-2008. En el mismo sentido considerando décimo octavo de la sentencia de casación Rol N° 3841-2012).

Otro argumento empleado para descartar la aplicación prescripción extintiva, presente en la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal, es el “principio de congruencia” en virtud del cual se afirma el carácter discriminatorio de la distinción entre acciones penales imprescriptibles y acciones civiles prescriptibles.

Si de un mismo hecho nacen ciertas acciones, darles un tratamiento distinto no guarda coherencia, por lo tanto, si de los crímenes contra la humanidad derivan acciones, civil y penal, ambas deben tener la misma suerte, es decir, se excepcionan de la prescripción extintiva.

“Tercero: Que, más allá de lo razonado por los jueces ad quem, reiterada jurisprudencia de esta Corte precisa que, tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado en la especie-, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5° de la



Carta Fundamental, que instauro el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que, en virtud de la ley N° 19.123, reconoció en forma explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de aquellos calificados como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, regalías de carácter económico o pecuniario. En esta línea discurren también SCS Nros. 20.288-14, de 13 de abril de 2005; 1.424, de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras.

Por ende, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad indispensables en un Estado de derecho democrático. Entonces, pretender el empleo de las disposiciones del Código Civil en la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el régimen jurídico, hoy resulta improcedente (...)”. (Excelentísima Corte Suprema, Sentencia de Casación de fecha 14.09.2015, dictada en los autos Rol N° 1092-15).

5) La excepción interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, representante del Fisco de Chile, contradice abiertamente el expreso reconocimiento de su responsabilidad internacional efectuado por el Estado Chileno durante la tramitación del CASO ÓRDENES GUERRA Y OTROS VS. CHILE seguido ante CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Corte IDH).

Expuso que mediante sentencia de fecha 28 de noviembre de 2018, la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS



HUMANOS condenó al Estado chileno como responsable por la violación del derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, ello como consecuencia de la aplicación de la figura de prescripción a acciones civiles de reparación relacionadas con crímenes de lesa humanidad.

Durante la tramitación del caso, el Estado Chileno efectuó un expreso reconocimiento de su responsabilidad estatal, según se consigna en el citado fallo:

"90. La Corte destaca que, tal como reconoció el Estado, el hecho ilícito que generó su responsabilidad internacional se configuró por el rechazo, por parte de los tribunales de justicia nacionales, de acciones civiles intentadas por las víctimas de reparación de daños ocasionados por actos calificados como crímenes de lesa humanidad, con base en la aplicación de la figura de la prescripción, alegada como excepción por el Consejo de Defensa del Estado en representación del Fisco chileno. Tal criterio impidió que los tribunales analizaran en su mérito la posibilidad de determinar una indemnización por los daños y perjuicios morales ocasionados a las víctimas, restringiendo la posibilidad de obtener una reparación justa. Es decir, no hay duda de que en este caso las violaciones de derechos reconocidos en la Convención se produjeron por una serie de decisiones de órganos judiciales del Estado que impidieron a las víctimas acceder materialmente a la justicia para reclamar su derecho de obtener una reparación.

91. Sin embargo, la naturaleza de tales hechos ha llevado al Estado, con base en el cambio jurisprudencial de su máxima autoridad judicial, a reconocer ante este Tribunal que no es aplicable la prescripción civil a acciones que procuren reparaciones por daños y





perjuicios ocasionados por ese tipo de hechos (supra párr. 15).

92. En efecto, el Estado comparte el criterio de que las reclamaciones de reparación por violaciones flagrantes de los derechos humanos no se encuentran sujetas a prescripción y que no puede excusarse en el mero paso del tiempo (fundamento de la prescripción) para no dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales de investigar, sancionar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo 1973-1990, lo que incluye su arista indemnizatoria. En este sentido, señaló que la jurisprudencia nacional ha integrado paulatinamente el derecho internacional de los derechos humanos al ordenamiento jurídico nacional, de modo tal que las modificaciones legales posteriores y la integración de los tratados internacionales en sus fallos han permeado la jurisprudencia del tribunal superior del país, que ha reconocido la admisibilidad de acciones judiciales de carácter civil del tipo referido (...)”.

6) Finalmente, cabe consignar el hecho que diversas autoridades y representantes del Estado Chileno han defendido ante organismos internacionales la imprescriptibilidad de la acción civil indemnizatoria, a saber:

Dice que en relación al punto, cita el fallo de nuestra Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, dictado con fecha 25.03.2020, en los autos Rol 180-2019:

7) La jurisprudencia constante y consistente de nuestra excelentísima Corte Suprema, ha venido reconociendo, a partir del año 2015, el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de los crímenes de lesa humanidad.

III) EN SUBSIDIO, EN CUANTO AL DAÑO E INDEMNIZACIÓN RECLAMADA.



En este punto, señaló que las alegaciones del Fisco dicen relación con la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido, remitiéndose a lo señalado en la demanda en cuanto a la procedencia del daño moral en este tipo de ilícitos. Asimismo, y en la etapa procesal correspondiente, indica que justificará la justicia del monto solicitado.

Por lo expuesto, solicitó tener por evacuada la réplica para todos los efectos legales.

Con fecha **30 de diciembre de 2022**, a folio, la parte demandada **evacuó el traslado de la duplica** señalando en primer lugar, ratifica la totalidad de las argumentaciones expresadas en la contestación de la demanda de autos, las que da por expresamente reproducidas y conforme a ellas pide el rechazo de la demanda.

En relación con la controversia de los hechos, dice que lo que señala al contestar la demanda es que el actor no ha sido reconocido por las comisiones Valech I ni II como víctima de prisión política y torturas, debiendo, en consecuencia, acreditar la totalidad de los presupuestos de su demanda. En efecto, habiéndose marginado el actor del proceso de justicia transicional elaborado por el Estado de Chile para identificar a las personas que sufrieron privación de libertad y torturas, y no existiendo pronunciamiento judicial alguno que así lo haya dispuesto, no le consta ni a esta parte ni al tribunal que el efectivamente haya sido víctima de violación a los derechos humanos como lo señala en su libelo.

Luego, señala que expuso que el demandante carece de legitimación activa para demandar, por cuanto no estando reconocido por parte del sistema institucional de reconocimiento a las víctimas de prisión política y tortura, no puede pretender una indemnización por hechos ocurridos hace décadas, a diferencia de aquellas



víctimas que efectivamente han sido reconocidas por los mecanismos institucionales dispuesto por el Estado para estos efectos.

Indicó que al contestar la demanda, en subsidio de lo señalado precedentemente, que la indemnización demandada resulta improcedente por limitación de la justicia transicional. En dicho contexto, se determinó una indemnización legal que optó por beneficiar a las víctimas de prisión política y tortura que han sido reconocidas por los mecanismos institucionales de justicia transicional, mediante un sistema legal de reparación pecunaria, por lo cual no es procedente conceder una indemnización bajo estándares de responsabilidad civil a personas que se excluyeron del sistema institucional de la justicia transicional para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, en relación a la excepción de prescripción, agrega que, en tanto el demandante no es víctima de violaciones a los derechos humanos al no haber sido reconocido como tal, no existe posibilidad alguna de alegar que nos encontremos en presencia de un crimen de lesa humanidad, resultando incuestionablemente aplicable la institución de la prescripción.

Es así como la Excma. Corte Suprema resolvió en los autos sobre recurso de casación en el fondo Rol de Ingreso 84760-16 caratulado: SOTO GUZMAN LUIS ALBERTO CON FISCO DE CHILE de fecha 26 de abril de 2017:

"Sexto: Que, concordante con lo razonado precedentemente, no puede sino mantenerse lo decidido, en relación a la excepción de prescripción deducida por la defensa fiscal, pues a su respecto no cabe aplicar el criterio de imprescriptibilidad que sostenidamente ha mantenido esta Corte, por cuanto aquél tiene como fundamento en la comisión de ilícitos de especiales características y por los cuales el actor no ha demostrado haber sido afectado, y en atención a ello la



acción indemnizatoria deducida debe ser estimada como de naturaleza meramente patrimonial, obligando de este modo a considerar el plazo transcurrido desde la data de los hechos invocados -11 de septiembre de 1973- y el de notificación de la demanda de autos -29 de enero de 2013-, en que claramente se demuestra que excede con creces el término de prescripción de cuatro años contenido en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con la responsabilidad aquiliana, resultando por ende procedente mantener la decisión de tener por concurrente la extinción de la acción por la prescripción que ha corrido a su respecto."

Por lo expuesto, solicitó tener por evacuado el trámite de la dúplica.

Con fecha **12 de enero de 2023**, a folio 20, y considerando lo dispuesto en el artículo 262, inciso primero del Código de Procedimiento Civil, se **recibió la causa a prueba**.

Con fecha **10 de octubre de 2023**, a folio 56, se **citó a las partes a oír sentencia**.

**CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.**

**PRIMERO:** Que, atento la controversia consignada en lo expositivo de esta sentencia, se recibió la causa a prueba fijándose en definitiva los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos:

1.- Efectividad que el demandante sufrió, maltratos y abusos, por parte de agentes del Estado de Chile o personas al servicio de éste. Hechos que configuran el maltrato, época y circunstancias en que se cometieron.

2.- En la afirmativa del punto anterior, efectividad de haberse ocasionado perjuicios al demandante, imputable al demandado. Naturaleza y monto del daño.

3.- Efectividad de haber transcurrido y extinguido el plazo que habilita la acción entablada en la demanda. En la afirmativa época de inicio y término de dicho plazo.



**SEGUNDO:** Que, para acreditar su pretensión, **la parte demandante**, produjo las siguientes probanzas:

**I.-Instrumental**, consistente en los siguientes documentos, no objetados:

1.- Escritura pública de fecha 02 de marzo de 2020, suscrita ante el Notario Público Interino de la Tercera Notaría de Punta Arenas, don Iván Andrés Toledo Mora.

2.- Certificado N° 0240/77, del Vice Rector Subrogante de la Universidad Técnica del Estado Sede Punta Arenas que certifica la calidad de alumno regular carrera Técnico en Producción Pecuaria durante el primer semestre de 1972, de don ALEJANDRO CONSTANTINO FERRER FERNANDEZ.

3.-. Página 3 del Diario "La Prensa Austral" con nota titulada "Unas 70 personas han sido arrestadas", dentro de las cuales figura don ALEJANDRO CONSTANTINO FERRER FERNANDEZ.

4.- Informe de la Visita al Campo de Detenidos del Regimiento de Inf. Ref. N° 10 "Pudeto", realizada por el Delegado General y Delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), donde se incluye listado de detenidos al 06 de diciembre de 1973, en el que figura con el N° 33 don ALEJANDRO CONSTANTINO FERRER FERNANDEZ.

5.- Foto de la primera visita de la Cruz Roja Internacional al campo de detención de Isla Dawson, en la que aparece don ALEJANDRO CONSTANTINO FERRER FERNANDEZ.

6.- Sentencia de Consejo de Guerra, que condena a don ALEJANDRO CONSTANTINO FERRER FERNANDEZ a la pena de 5 años y 1 día de relegación mayor en su grado mínimo en la localidad de Castro, y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios.

7.- Certificado de Antecedentes válido para FINES ESPECIALES de don ALEJANDRO CONSTANTINO FERRER FERNANDEZ, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, donde figura condena a 5 años de



relegación por infracción a las letras a), d) y f) del Art. 4 de la Ley N° 12.927 sobre Seguridad Interior del Estado y la conmutación de la pena por extrañamiento.

8.- Pasaporte de don ALEJANDRO CONSTANTINO FERRER FERNANDEZ, emitido por el Comisario de la 2da. Comisaría de Castro, donde se le autoriza a trasladarse a la ciudad de Santiago a fin de realizar los trámites para su salida del país en razón de la conmutación de la pena por extrañamiento.

9.- Informe Psicológico de Daño de don ALEJANDRO CONSTANTINO FERRER FERNANDEZ, practicado por profesional del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y DDHH (PRAIS).

10.- Certificado de Matrimonio de don ALEJANDRO CONSTANTINO FERRER FERNANDEZ y doña GLADYS ESTER ULLOA BONTES, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

11.- Certificado de Nacimiento de doña ALEJANDRA GLADYS FERRER ULLOA, hija de don ALEJANDRO CONSTANTINO FERRER FERNANDEZ, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

12.- Certificado de Nacimiento de don FERNANDO PATRICIO FERRER ULLOA, hijo de don ALEJANDRO CONSTANTINO FERRER FERNANDEZ, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

13.- Certificado de Nacimiento de don MARCELO VICENTE FERRER ULLOA, hijo de don ALEJANDRO CONSTANTINO FERRER FERNANDEZ, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

14.- Certificado de Defunción de don VICENTE FERRER MARTÍNEZ, padre de don ALEJANDRO CONSTANTINO FERRER FERNANDEZ, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

15.- Certificado de Defunción de doña DOLORES PILAR FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, madre de don ALEJANDRO CONSTANTINO



FERRER FERNANDEZ, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

16.- Tapa y páginas 1 a 13 del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura ("Comisión Valech

17.- Páginas 225 a 250 del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura ("Comisión Valech"), correspondientes al Capítulo V- Métodos de Tortura: Definiciones y Testimonios.

18. Páginas 467 a 513 del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura ("Comisión Valech"), correspondientes al Capítulo VIII- Consecuencias de la Prisión Política y Tortura, Sección: Las consecuencias en las Víctimas.

19.- Tapa y páginas 539 a 543 de la "Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas en la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech I)".

20.- "Informe acerca del daño psicológico y emocional en familiares de Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos durante la Dictadura Militar", elaborado por Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS), de fecha agosto de 2016.

21.- "Informe en Términos Generales sobre las secuelas dejadas en el Plano de Salud Mental relacionadas con las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la Dictadura Militar", elaborado por la Psicóloga del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos PRAIS Servicio de Salud Metropolitano Norte, de fecha 23 de septiembre de 2016.

22.- Tapa y páginas 30 a 50 de la "Norma Técnica para la Atención de Personas Afectadas por la Represión Política ejercida por el estado en el periodo 1973-1990", del Ministerio de Salud.





23.- Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Caso Órdenes Guerra y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 372.

**II.- Testimonial**, consistente en la declaración de los siguientes testigos individualizados con fecha 14 de julio de 2023, a folio 24, quienes previamente juramentados, y habiendo dado razón de sus dichos señalaron lo siguiente:

1.- **BALDOVINO ERASMO GOMEZ ALBA**, chileno, casado, profesor, cédula nacional de identidad N° 6.072.278-1, domiciliado en Calle Uruguay N° 01649, Punta Arenas.

**AL PUNTO DE PRUEBA N° 1 EXPUSO:** "Es efectivo, esto me consta porque nos encontramos en el gimnasio del regimiento Pudeto, detenido, después del 15 de septiembre de 1973, que fue la fecha en que yo ingresé a ese campo de detención y ahí estuvimos detenidos hasta el 20 o 21 de diciembre de 1973, donde fuimos trasladados al campo de concentración de Isla Dawson. En el regimiento Pudeto, Alejandro Ferrer había llegado con otros compañeros Natalinos, Cesar Oyarzo Vivar, el profesor Aurelio Rosas, César Valenzuela del Rio, Libio Pérez, y una persona de apellido Ormeño, ese era el grupo de Natales, que estaba con Alejandro Ferrer. Durante esos cuatro meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, tanto Alejandro Ferrer como todos los detenidos fueron sistemáticamente sometidos a torturas, en Colon N° 636 que era el principal centro de tortura de la dictadura, el Cochrane, la casa del deportista, y en el mismo Regimiento Pudeto. Además Alejandro Ferrer fue sometido a un concejo de guerra, en octubre de 1974, y estuvo en el campo de concentración de Isla Dawson. En el caso de Isla Dawson, incluso en el año 2013, tuvimos acceso a dos fotos donde están los presos políticos de Magallanes, eso fue tomada la primera semana de enero de 1974, y aparece claramente la



figura de Alejandro Ferrer, Augusto Vera, y Liborio, entre los que reconozco.”

**Repreguntado** para que diga el testigo, al exhibirle foto acompañada por la parte demandante, individualizada con el numeral 4 de presentación de fecha 22 de julio de 2023, folio 29 de autos. Para que diga el testigo, si reconoce al demandante en la foto y si lo puede individualizar y donde fue tomada esa foto.

**Responde:** “Esta foto fue tomada en el sector de la guardia del campo de concentración e Isla Dawson, los portones de acceso están abiertos y Alejandro Ferrer es el primero de la fila del grupo de presos, al lado izquierdo, que están al lado de la construcción, está con la parka que lo conocimos siempre, flaco y alto, y con las manos atrás, detrás de él esta Augusto Vera Velásquez, que es el más bajo de todos y esta con uniforme blanco, porque él trabajaba en la panadería.”

**Repreguntado** para que diga el testigo si tiene conocimiento del resultado del consejo de guerra al cual fue sometido el demandante.

**Responde:** “Sí, en ese consejo de guerra fue condenado, entiendo que a 4 o 5 años, y después lo cambiaron por relegación, entiendo que estuvo en Chiloé, creo que en Castro.”

**Repreguntado** para que diga el testigo, si tiene conocimiento, que ocurrió con el demandante con posterioridad a su relegación.

**Responde:** “Como muchos presos políticos las condiciones de sobrevivencia en nuestro país eran muy difíciles, sin trabajo, relegados y perseguidos, con una familia, una señora y 3 niños, logró salir al exilio a Estados Unidos.”

**Repreguntado** para que describa el testigo, brevemente las condiciones de vida en Isla Dawson.

**Responde:** “Eran las peores, recordando que es un campo de concentración, había cerca de 90 personas en



cada barraca, las barracas eran construcciones muy precarias, tenían solamente lata por fuera y no tenían forro, calefacción poca y escasa, un régimen de trabajo forzado y agresión y humillación permanente, diaria, incomunicado de la familia, estaba prohibido tener cuadernos, hojas, lápices, la posibilidad de escribirle a la familia era en un formulario de manera esporádica, con 7 líneas y permanentemente censurado con palabras cortadas y borroneadas con plumones o simplemente cortada con Gillette.

**Repreguntado** para que diga el testigo, en que barraca estuvo el demandante.

**Responde:** "En este campo había 4 barracas en donde estuvieron los presos políticos de Magallanes, Alfa, Bravo, Charlie y Remo. Alejandro Ferrer estaba en la barraca Charlie, estábamos juntos, me acuerdo hasta del número, no podíamos usar nuestros nombres y se nos asignó una letra y un número, recuerdo que yo era Charlie 21 y estoy casi seguro de Ferrer era el N° 50, porque sigue usando ese número en sus correos."

**AL PUNTO DE PRUEBA N° 2 EXPUSO:** "Es efectivo, un daño permanente, hasta el día de hoy, producto de haber sido sometido a tortura, haber estado secuestrado por los militares en un campo de concentración, perdiendo su calidad de vida, Alejandro Ferrer hasta antes del golpe era gerente de Ematur, Empresa Magallánica de Turismo, a cargo de las hosterías de toda la Región y de eventos tan importantes como el Festival de la Patagonia y producto del golpe de estado, perdió su trabajo, mientras estuvo en Chile vivió en la sobrevivencia, él y sus 3 hijos y su grupo familiar, obligado a irse al exilio, a un país que no conocía y otro idioma, fueron años muy difíciles para él y su familia, obligado a hacer trabajos menores, mientras aprendía el idioma y el daño se mantiene hasta hoy que no ha podido regresar a su patria."



2.- **JOSÉ AUGUSTO VERA VELÁZQUEZ**, chileno, viudo, pensionado, cédula nacional de identidad N° 5.150.943-9, domiciliado en Calle Herman Eberger N° 998, Punta Arenas.

**AL PUNTO DE PRUEBA N° 1 EXPUSO:** "Sí, es efectivo, esto me consta porque el mismo día que él llegó al regimiento Pudeto, yo había llegado minutos antes, en calidad de preso político, o prisionero de guerra. Él fue torturado y llevado a la casa de la alegría, ubicada en calle Colón N° 636, ahí actuaba el servicio de inteligencia militar, las agresiones se llevaban a efecto de distintas formas, psicológicas, con golpes, corrientes, en distintas partes del cuerpo, llámese ano, pene, boca, y golpeados apunta de manos y pies, y arrastrados del pelo muchas veces, esto lo digo porque yo también pasé por la misma situación."

**Repreguntado** para que diga el testigo, cuanto tiempo permanecieron detenidos en el Regimiento Pudeto y que pasó a continuación con el demandante.

**Responde:** "En el caso nuestro, estuvimos todos detenidos hasta el día 19 de diciembre de 1973, fecha en que fuimos remitidos al lugar de prisioneros políticos, al campo de concentración de Isla Dawson. En el caso de Ferrer, estuvo hasta enero de 1974, siendo remitido a la ciudad de Punta Arenas, se quedó por un tiempo que tenía que firmar en forma diaria."

**Repreguntado** para que diga el testigo, si con posterioridad a su liberación de Isla Dawson, el demandante fue nuevamente detenido y razón de la misma.

**Responde:** "Sí, así es efectivamente, fue detenido y pasó al consejo de guerra en el mes de octubre de 1974, por ser militante y dirigente del Partido Socialista."

**Repreguntado** para que diga al testigo, como le consta que don Alejandro Ferrer pasó al consejo de guerra y si sabe el resultado del mismo, y en la afirmativa si sabe cuál fue la condena,



**Responde:** "Sí, efectivamente, a través de la resolución del consejo de guerra, fue condenado a relegación a la ciudad de Castro, cosa que se hizo con una infinidad de compañeros, entre esos fuimos notificados los que estamos en el regimiento Cochrane, de este fallo, ya que se nos comunicó, que seríamos relegados los últimos 27 detenidos en dicho destacamento militar, lo que en mi caso, fui remitido a la ciudad de Llanquihue, el día 19 de mayo de 1975 hasta el día 28 de diciembre de 1977, en que pude retornar a la ciudad de Punta Arenas."

**Repreguntado** para que aclare el testigo, si en su caso fue objeto del consejo de guerra y si este corresponde al mismo de que fue objeto el demandante.

**Responde:** "No estuve en el consejo de guerra, según lo que nos informaron a nosotros en la Fiscalía Militar, del fallo."

**Repreguntado** para que diga el testigo, si sabe, que sucedió con el demandante, con posterioridad a su relegación.

**Responde:** "Después de un tiempo supe que el ciudadano Ferrer, fue enviado a Estados Unidos en calidad de preso político."

**Repreguntado** para que diga el testigo al exhibirle foto acompañada con el numeral 4 de presentación efectuada por la parte demandante con fecha 22 de julio de 2023, a folio 29, si reconoce el ella al demandante, en la afirmativa, describa donde fue tomada dicha foto e identifique a don Alejandro Ferrer.

**Responde:** "Si, lo reconozco, Ferrer es el primer hombre a mano izquierda y yo me encuentro detrás de él. Él es una persona delgada, alta, con una parka ploma de cuello negro, brazos cruzados a la espalda. Esta foto representa la Isla Dawson, donde normalmente nos reuníamos todos los presos políticos y ahí nos hadan el control, todos los días, tarde y mañana."



**Repreguntado** para que diga el testigo, si en su caso, si se puede identificar bien en donde está.

**Responde:** "Estoy con un gorro blanco, porque hada las veces de panadero, mi pantalón blanco y mi parka."

**Contrainterrogado**, para que aclare el testigo, si el demandante ha viajado a Chile, con posterioridad al término de la dictadura.

**Responde:** "Sí, sí ha estado en Punta Arenas, por lo menos yo en una oportunidad tuve el gusto de saludarlo, después de muchos años."

**AL PUNTO DE PRUEBA N° 2 EXPUSO:** "Sí, lógicamente, tanto en lo laboral, social y familiar. El hecho de estar lejos de la familia, sus padres fallecieron sin él poder estar presente en los funerales de sus padres. Aparte de eso fue el nacimiento de uno de sus hijos, después que a él lo tomaron detenido y lo vino a conocer después de 2 meses, a mí me pasó algo igual, yo conocí a mi hijo después de 1 año y dos meses de nacido, mi señora estaba embarazada cuando me tomaron detenido."

**Repreguntado** para que diga el testigo, cuáles serían los perjuicios laborales que señaló en su respuesta.

**Responde:** "Bueno, que se quedó sin trabajo, él trabajaba en una agencia de turismo que era del Estado, en la ciudad de Puerto Natales, tengo entendido que era un trabajo de la Cormag."

**Repreguntado** para que diga el testigo, cuales sería los perjuicios sociales del demandante que señala en su respuesta.

**Responde:** "El hecho de no estar con la familia, creo que es lo más terrible del mundo, los hijos menores de edad necesitan el apoyo del padre y la madre."

3.- **ROMINA VALENTINA YÁÑEZ VÁSQUEZ**, psicóloga, cédula nacional de identidad N° 19.694.605-5, domiciliada para estos efectos en calle Independencia N° 548. Punta Arenas.



**AL PUNTO DE PRUEBA N° 1 EXPUSO:** "Sí, es efectivo, ante esto a petición del abogado presente, don Pablo Bussenius, realicé un informe, en mi calidad de Psicóloga del programa Prais, donde me desempeño realizando psico diagnósticos, terapia psicológica y evaluación de daños. El programa Prais es un programa de reparación y atención integral de saludo y derechos humanos, que es del Ministerio de Salud, que responde al compromiso de reparación asumido por el Estado de Chile, con la victimas que fueron vulneradas en sus derechos, en el periodo del 11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990. Ante esto hice una evaluación, utilizando el protocolo de Estambul, que es un manual que permite documentar el daño de la víctima, las torturas, los maltratos físicos y psicológicos. Frente a esto, es posible dar cuenta que efectivamente el evaluado fue detenido el de septiembre de 1973, en Puerto Natales, para luego ser llevado al Regimiento Pudeto, ahí tuvo diferentes apremios físicos y psicológicos tales como golpizas, culatazos, golpes con puños, patadas y en algunas ocasiones, fue llevado al palacio de la risa para ser torturado con choques eléctricos en diferentes zonas de su cuerpo, tales como sus extremidades, legua y genitales. Ahí también en el regimiento estaba en condiciones inhumanas, tenían que dormir en el piso, y cantaban con solo 2 baños, para alrededor de 200 personas, de ahí fue trasladado a Isla Dawson, ahí recibió más que nada trabajos forzados, más que apremios físicos, y ahí se mantuvo, según lo que él me cuenta, hasta el año 1974, para ser dejado en libertad. Al cabo de 8 meses fue nuevamente detenido y es llevado a la cárcel pública a la espera del segundo consejo de guerra que se hizo acá en Magallanes, en contra del partido Socialista y ahí fue condenado a 5 años de relegación, en la ciudad de Chiloé, específicamente, en Quellón y





Castro. Después de eso se transformó en una medida de extrañamiento para ser exiliado a Estados Unidos.”

**Repreguntada** para que diga la testigo, administrativamente, de quien depende el programa Prais.

**Responde:** “El programa Prais, depende del Servicio de Salud.”

**AL PUNTO DE PRUEBA N° 2 EXPUSO:** “Sí, se le ocasionaron perjuicios, frente a esto se concluye en la evaluación que se hizo que don Alejandro Ferrer si fue víctima de detención ilegal, de tortura física, psicológica y sexual, por parte de agentes del estado de Chile y que aún siguen siendo presentes en la vida del evaluado, que han dejado huellas psicológicas y emocionales, hasta la actualidad. En primer lugar, se ve reflejado físicamente ocasionándole un trastorno del sueño crónico que no se ha podido regular desde que sucedió el hecho represivo. También ha tenido dolores de espalda debido a los golpes que recibió y en su momento también tuvo úlceras gástricas, producto de la ansiedad en su momento de ser perseguido. Psicológicamente se observa una baja autoestima y también sintomatología ansiosa que es fluctuante en el tiempo, esto se ve reflejado cada vez que el evaluado vuelve a recordar eventos similares al hecho represivo o cada vez que habla de él específicamente. Sintomatología también evitativa hacia los demás, mucho miedo frente a figuras de las fuerzas armadas, lo somatiza con dolor de estómago, dolores musculares y a veces dolores de cabeza, eso concluye que el evaluado, aún tiene sintomatología de un trastorno de estrés traumático. También afecto a nivel familiar, específicamente la esposa de don Alejandro, ocasionándole también mucha ansiedad y sus hijos también ya que ellos fueron hostigados por agentes de la armada. Laboralmente, como don Alejandro no podía tener trabajo, también resultó un



impacto para la familia ya que no podía solventar las necesidades básicas de la familia.

Políticamente, esto ha generado también un quiebre en la percepción que él tenía de las Fuerzas Armadas, las que también le ocasionan mucho miedo y ansiedad."

El abogado demandante solicitó se exhiba a la testigo, informe de daño, a consecuencia de prisión política, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, acompañados con el numeral 8 de la presentación de esta parte con fecha 22 de julio de 2023, que rola a folio 29, para que reconozca su autoría de dicho informe y la firma estampada en el mismo.

**Responde:** "Sí, yo soy la autoría del informe que se me exhibe y si reconozco mi firma."

4.- **MANUEL LUIS RODRIGUEZ URIBE**, chileno, sociólogo, cédula nacional de identidad N° 6.101.394-6, domiciliado en Calle Manuel Ibáñez Pérez N° 598, Población Capremer, Punta Arenas.

**AL PUNTO DE PRUEBA N° 1 EXPUSO:** "Si, Alejandro Ferrer fue efectivamente objeto de maltratos y torturas por parte de agentes del Estado entre los años 1973 y 1974, y torturas, las que fueron cometidas, tanto en el regimiento Pudeto, como en el centro de tortura de avenida Colón N° 636 de Punta Arenas, en lo que se refiere a maltrato físico. En cuanto al maltrato psicológico, él sufrió la incertidumbre de la detención, la lejanía de su familia, respecto de sus hijos, tenía 2 menores de edad."

**Repreguntado** para que diga el testigo, si tiene conocimiento si el demandante fue objeto de detención ilegal y secuestro con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, en la afirmativa, lugares de detención, fechas y circunstancias.

**Responde:** "Sí, efectivamente fue detenido, su propia detención es ilegal, por lo tanto, fue todo ilegal, lo que sucedió con él después del 11 de septiembre de 1973.



Él fue detenido en su lugar de trabajo y conducido al Regimiento Pudeto, recuerdo que yo fui detenido el 12 de septiembre de 1973, en el Regimiento Pudeto y cuando llegué al lugar de detención, Ferrer ya estaba allí detenido, por lo tanto, tiene que haber sido el 11 de septiembre de 1973."

**Repreguntado** para que diga el testigo, hasta que fecha permaneció detenido el demandante en el regimiento Pudeto.

**Responde:** "Hasta el 21 de diciembre de 1973. En el regimiento Pudeto de Punta Arenas, fecha en la que los detenidos políticos fuimos conducidos a la Isla Dawson, incluido a Alejandro Ferrer, en donde permanece en Dawson hasta febrero de 1974, y de ahí fue devuelto a Punta Arenas."

**Repreguntado** para que diga el testigo, si tiene conocimiento si durante el periodo de detención del demandante en el regimiento Pudeto, este fue sacado del mismo para ser llevados a otros centros de detención y tortura y en la afirmativa, a cuáles.

**Responde:** "Por lo menos en dos oportunidades, Ferrer fue llevado a sesiones de interrogatorio y tortura al inmueble de Colón N° 636."

**Repreguntado** para que diga el testigo, si con posterioridad a su liberación de Isla Dawson, fue nuevamente detenido el demandante, en la afirmativa, razón de su detención.

**Responde:** "Sí, efectivamente fue detenido nuevamente, en detalle en particular no lo recuerdo."

**Repreguntado** para que diga el testigo, si el demandante fue objeto de algún tipo de procedimiento judicial, ya sea civil o militar, en la afirmativa, cual fue este.

**Responde:** "Él fue objeto de procedimiento en la justicia militar, considerando que él era militante del partido Socialista."



**Repreguntado** para que diga el testigo, si tiene conocimiento si el demandante fue sometido a consejo de guerra, y en la afirmativa, si conoce el resultado del mismo.

**Responde:** "Sí, efectivamente Alejandro Ferrer fue sometido a consejo de guerra, en el marco del consejo de guerra contra el partido Socialista, y fue condenado a una pena de relegación de 5 años la que posteriormente conmutada por extrañamiento."

La parte demandante solicita exhibir al testigo, foto acompañada con el numeral 4 de presentación efectuada por esta parte de fecha 22 de julio de 2023, a folio 29, para que diga el testigo reconoce en dicha foto a don Alejandro Ferrer, en la afirmativa lo identifique dentro de la misma foto y brevemente señale a que corresponde dicha foto.

**Responde:** "Sí reconozco la fotografía, que corresponde al patio principal del campo de concentración de río Chico en Isla Dawson, y reconozco que efectivamente acá se encuentra Alejandro Ferrer, de espalda al que tomó la foto, es el primero a mano derecha del grupo que se encuentra al costado izquierdo de la imagen, está con una parka gruesa, botas, el más alto del grupo y está con los brazos atrás, es muy probable, por no decir seguro, que yo también me encuentro en esa foto, ya que corresponde al mismo lugar en donde yo me encontraba."

**AL PUNTO DE PRUEBA N° 2 EXPUSO:** "Por cierto, sin lugar a dudas, diversos daños, tales como daño físico como consecuencia de las torturas, daño psicológico dada la naturaleza de la persecución de la que fue objeto, daño patrimonial, ya que él tenía un trabajo, era ejecutivo de Ematur, Empresa Magallánica de Turismo, hay un daño familiar, la separación de su esposa y de sus hijos, el tercer hijo su nace mientras él estaba en prisión, yo diría que el propio extrañamiento o exilio,



es un daño psicológico y humano permanente, para el demandado y para su familia, incluso yo puedo decir que hubo un daño a su honra, ya que en ninguna de las actividades en donde él participó antes del 11 de septiembre de 1973, eran ilegales e ilícitas."

**III.- Oficios,** consistente en la solicitud de oficiar al Sr. Ministro en Visita Extraordinario de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, don Marcos Kusanovic Antinopai, con el objeto que se sirva remitir a este Tribunal, copia autorizada de la sentencia dictada en Consejo de Guerra Rol 21/73 TG, de fecha 10 de octubre de 1973, recaída en expediente Rol N° 3-2015, por el delito de secuestro y otros, en el que resultó condenado don ALEJANDRO CONSTANTINO FERRER FERNANDEZ.

El oficio señalado se tuvo por recibido con fecha 28 de diciembre de 2022, folio 17.

**TERCERO:** Que, **la parte demandada,** rindió las siguientes probanzas:

**I.- Instrumental,** no objetada, consistente en los siguientes documentos:

1.- Resolución TRA N° 45/4/2020, de fecha 3 de septiembre de 2020, emitida por el Consejo de Defensa del Estado.

2.- Minuta y planilla que da cuenta del estudio efectuado por el Consejo de Defensa del Estado respecto de las causas iniciadas durante los años 2018 y 2019, por indemnizaciones de perjuicios por daño moral derivado de actos constitutivos de tortura y detención ilegal sufridas durante el periodo del régimen militar en Chile, que han concluido por sentencia condenatoria.

**II.- Oficios,** consistente en la solicitud de oficiar al Instituto de Previsión Social (IPS) para que informe al tribunal de todos los eventuales beneficios otorgados al demandante ALEJANDRO CONSTANTINO FERRER



FERNANDEZ, Rut 5.068.148-3, por las leyes especiales de reparación 19.992, 19.980 u otros cuerpos legales.

El oficio señalado se tuvo por recibido con fecha 2 de octubre de 2023, a folio 53.

**CUARTO:** Que el Fisco de Chile junto con controvertir todas las afirmaciones efectuadas por el actor, en cuanto a su calidad de prisionero político que fue objeto de torturas, afirma que carece de legitimación activa para intentar la presente acción indemnizatoria por el simple hecho de no figurar en la lista de presos políticos del denominado Informe Valech.

Al respecto cabe señalar que figurar en la referida nómina no constituye un requisito sine qua non para ser considerado preso político y objeto de torturas, ni menos un requisito previo que legitime para deducir la correspondiente acción indemnizatoria. En efecto, lo que otorga el carácter de víctima de delitos de lesa humanidad y legitima para demandar el resarcimiento de los daños sufridos es la naturaleza de los ilícitos del cual fue objeto el actor.

Así el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional señala en su artículo 7° que para efectos del Estatuto se entiende por crimen de lesa humanidad las conductas que describe, cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Entre las conductas descritas en la norma se destaca: la tortura, persecución de un grupo o colectividad fundada en motivos políticos y desaparición forzada de personas.

A su turno, a nivel nacional en el párrafo primero de la ley 20357 se señala que constituyen delitos de lesa humanidad, aquellas conductas que respondiendo a una política de Estado o de sus agentes, bajo la dirección de un mando responsable, constituyan un ataque generalizado o sistemático a un número considerable de personas. Comprendiendo actos como la tortura, privación



de libertad por más de cinco días y expulsión por la fuerza a personas del territorio del Estado.

En definitiva habrá que estarse al mérito de la prueba rendida en autos para determinar la existencia de los ilícitos y si estos pueden calificarse como de lesa humanidad conforme a la normativa referida, atento su autoría por agentes del Estado, su extrema gravedad al afectar derechos fundamentales reconocidos por la comunidad internacional y su carácter sistemático, generalizado, indiscriminado e injustificado contra la población civil.

**QUINTO:** Que a fin de acreditar la existencia de los delitos de lesa humanidad de que fue objeto, el actor rindió prueba instrumental y testimonial.

En cuanto a la prueba instrumental destaca el Informe de Visita al Campo de Detenidos del Regimiento de Infantería Pudeto, efectuada por Delegado General y Delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja, donde se consigna como fecha de la visita el 11 de diciembre de 1973, figurando en la lista de detenidos adjunta al informe el actor don ALEJANDRO CONSTANTINO FERRER FERNANDEZ.

Asimismo se aparejó a los autos documentos no objetados consistentes en publicaciones, así se agregó una remembranza de Aristóteles España, de diciembre de 2006, titulada "Navidad en la Prisión de Isla Dawson", en donde se recuerda una navidad vivida por los prisioneros de Isla Dawson treinta y tres años atrás, en que se menciona a don Alejandro Ferrer como uno de los prisioneros existentes en ese entonces en dicho campo de concentración. Igualmente se adjuntó al expediente publicación electrónica del diario La Prensa Austral donde se informa la muerte de un ex preso político de Isla Dawson, señalando la publicación que el actor intervino en el funeral dirigiendo algunas palabras,





recordando al fallecido como su compañero de cautiverio en dicha isla.

Se acompañó también fotografía de primera visita de la Cruz Roja Internacional al campo de detención de Isla Dawson donde aparece el demandante de autos como uno de los prisioneros del lugar.

Además se acompañó a los autos sentencia de Consejo de Guerra de fecha 18 de octubre de 1974, por el cual se condenó al actor a cinco años y un día de relegación mayor en su grado mínimo en la localidad de Castro, por infracción a la Ley Sobre Seguridad Interior del Estado. Complementa tal instrumental el certificado de antecedentes del demandante en el cual figura la condena referida.

Igualmente no se puede pasar por alto el "Informe de Daños a Consecuencia de Prisión Política, Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes", evacuado por un profesional del "PRAIS", lo que evidencia que el demandante ha sido atendido y evaluado por el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos, el que precisamente nace el año 1991 como respuesta al compromiso de reparación asumido por el Estado con las víctimas de la represión política durante el periodo del gobierno de la dictadura cívico-militar en Chile.

**SEXTO:** Que a su turno los testigos Gómez Alba, Vera Velásquez y Rodríguez Uribe son contestes en que el demandante fue detenido por razones políticas en septiembre del año 1973, el testigo Rodríguez precisa que lo fue el mismo día 11, siendo recluido en el Regimiento Pudeto, fue llevado al antiguo Hospital Naval, conocido como palacio de la sonrisa o de la risa, fue sometido a consejo de guerra y condenado a 5 años de relegación, fue trasladado a Isla Dawson donde le correspondió la "Barraca Charlie". Posteriormente su



condena fue permutada por la de extrañamiento saliendo al exilio.

Asimismo los tres testigos, a quienes se les exhibió la fotografía de la primera visita de la Cruz Roja Internacional al campo de detención de Isla Dawson, reconocen al actor en la foto, indicando que es el primer hombre de la izquierda que da la espalda a quien sacó la fotografía, agregando que lo reconocen por su ropa, contextura delgada y su altura.

Tales testigos son presenciales y dan razón de sus dichos, pues también fueron presos políticos en la época en que lo fue el demandante y coincidieron en los lugares ya referidos.

Además los testigos manifiestan que en los señalados lugares de detención fueron objeto de torturas, así refieren golpizas de pies y manos, hacinamiento, aplicación de electricidad, arrastre por el pelo, condiciones de vida inhumanas y trabajos forzados entre otros.

Finalmente destaca la declaración de la psicóloga del programa PRAIS, Romina Valentina Yáñez Vásquez, quien evaluó al actor y constató en él daño derivado de su prisión política y de la tortura física y psicológica de que fue objeto.

**SÉPTIMO:** Que la prueba referida en los dos motivos que preceden hace plena fe en cuanto al hecho que el demandante fue preso político durante la dictadura cívico-militar y que además fue objeto de torturas, lo que no sólo se establece en base a la declaración de la testigo Yáñez Vásquez, sino que además se infiere del hecho de su estadía en lugares que el Informe Valech reconoce como recintos donde se aplicaron torturas a los presos políticos, no existiendo en autos prueba o antecedente alguno que permita concluir que se hizo una excepción en el trato respecto del prisionero político Ferrer Fernández.



Así entonces se acredita la legitimación del actor para accionar como víctima de delitos de lesa humanidad, toda vez que los delitos de que fue objeto cumplen con todos los parámetros ya referidos en esta sentencia para ser calificados como crímenes contra la humanidad, debiendo desecharse la alegación de la demandada en cuanto niega tal legitimidad.

**OCTAVO:** Que en subsidio de su alegación de falta de legitimidad, la demandada alega la improcedencia de la indemnización pretendida por limitación de la justicia transicional.

Al efecto afirma que nuestro país ha llevado adelante una política de reparación que se inserta dentro de las medidas propias de la justicia transicional. Una de estas medidas es la convocatoria a la Comisión Valech I -tanto en su período original como en su etapa de reconsideración- y la Comisión Valech II, las que tuvieron como objeto el determinar de acuerdo a los antecedentes que se presentaren, quiénes fueron las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Para el cumplimiento de su objetivo, se constituyó un organismo técnico donde mediante un detallado procedimiento y resguardando la confidencialidad de los antecedentes que aportaron cada uno de quienes comparecieron, se entregó como resultado sendos informes en que se comunican tanto los fundamentos generales que se tuvieron en cuenta para rechazar la calidad de víctima de ciertos comparecientes, como los listados de todos quienes fueron calificados como víctimas de prisión política y torturas por el Estado.

Así, tras más de una década de haber culminado el plazo para hacerse parte de esta política de reparación,



el demandante intenta invocar las disposiciones del derecho común para obtener una indemnización que debió haber reclamado en su oportunidad, en el contexto de medidas adoptadas al amparo de la justicia transicional. La omisión del demandante, libre y consciente, tiene efectos jurídicos y no puede desconocer que el Estado ha optado por un camino especial de reparación que debe ser resguardado.

**NOVENO:** Que tal alegación será desestimada, tanto por los argumentos vertidos en los motivos que preceden a propósito de la alegación de falta de legitimación activa del demandante, como por la consideración de la doctrina plasmada en la jurisprudencia de nuestra Excelentísima Corte Suprema, causas rol N°4024-13, 20.288-14 y 1092-15, conforme a la cual la acción civil que se funda en un delito de lesa humanidad tiene por finalidad obtener la reparación integral de los perjuicios atento los tratados internacionales ratificados por Chile y la interpretación de la normativa interna conforme a la Constitución Política de la República.

Así las cosas, la alegación planteada por el Fisco contradice la normativa internacional y la constitución pues el derecho interno sólo resulta aplicable si no está en contradicción con dicha normativa.

En efecto, nuestro máximo tribunal sostiene que lo previsto en los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de la cual los Estados partes se comprometen a respetar los derechos humanos de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción y en caso de ser violados debe propenderse al pago de una justa indemnización a la parte lesionada, implica que la responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad queda sujeta al derecho internacional.

Por otra parte, dicha normativa internacional obliga al Estado de Chile a reconocer y proteger el derecho a



la íntegra reparación, lo que viene a limitar y condicionar la actuación de los poderes públicos conforme lo previenen los artículos 5° y 6° de la Constitución Política de la República.

En definitiva la doctrina señalada permite afirmar que no resulta factible sostener que el hecho de no haberse sometido a los mecanismos contemplados por la ley 19.992, a fin de ser reconocido y figurar en las listas de prisioneros políticos y víctima de tortura prevista por la ley, implica la pérdida del derecho a exigir la reparación del daño moral sufrido como víctima de violaciones a los DD.HH., ya que dicha legislación sólo contempló como reparación pensiones asistenciales que configuran modalidades distintas de compensación que asume voluntariamente el Estado, no pudiendo sostenerse que han renunciado a obtener la completa reparación del daño sufrido mediante los arbitrios previstos en la legislación interna.

Asimismo, de aceptarse la tesis del Fisco quedaría sin aplicación el sistema de responsabilidad del Estado que emerge de los artículos 6° de la Constitución y 3° de la ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

**DÉCIMO:** Que además como alegación subsidiaria el Fisco postula la prescripción extintiva de la acción de perjuicios intentada por el actor. Al respecto argumenta señalando que en la especie el referido instituto jurídico se rige por lo prescrito en el artículo 2332 del Código Civil, aplicable a su respecto en virtud de lo previsto en el artículo 2497 del mismo Código.

Así conforme a la demanda, la detención y apremios sufridos por actor se produjeron entre septiembre de 1973 y 1981 (sale en 1976 a Estados Unidos de Norte América y cumple pena de extrañamiento de 5 años.

Agrega que aun entendiéndose suspendida la prescripción durante el periodo de la dictadura cívico-



militar, en atención a la fecha de notificación de la demanda, 22 de noviembre de 2022, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción previsto en la ley.

Asimismo, insiste en que los delitos de que fue objeto el actor no califican como de lesa humanidad, al no figurar este en los registros de la Comisión Valech.

En subsidio opone la excepción de prescripción fundada en el artículo 2515 del Código Civil, afirmando igualmente que el plazo de cinco años contemplado en la norma ha transcurrido con creces.

Alega que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere de texto expreso. No existe un texto constitucional o legal que disponga que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible.

La acción destinada a exigir la indemnización tiene un contenido patrimonial y está expuesta a extinguirse por prescripción.

Finalmente el Fisco sostiene que los instrumentos internacionales en el que se funda la demanda, no contemplan disposición alguna que declare la imprescriptibilidad de la acción civil derivada de delitos o crímenes de lesa humanidad o prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia. Al respecto se refiere a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad; Convención de Ginebra de 1949; Resolución N° 3.074, de 03 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominado "Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad"; y a la Convención Americana de Derechos Humanos.

**DÉCIMO PRIMERO:** Que tal alegación será igualmente desechada teniendo para ello presente el hecho que el delito de tortura, -aplicación de electricidad, golpizas, trabajos forzados, entre otros-, es de lesa humanidad



conforme lo reconoce tanto la legislación internacional como interna, resultando irrelevante para su calificación como tal el verificar si la víctima figura o no en una determinada nomina confeccionada al efecto.

Asimismo, para el rechazo de la alegación se tiene presente la doctrina plasmada en la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal que al respecto señala que tratándose de un delito de lesa humanidad, -como ocurre en la especie-, cuya acción penal es imprescriptible conforme a la normativa internacional, resulta incoherente sostener que la acción civil indemnizatoria que emana del mismo hecho se sujete a la legislación civil interna, pues con ello se contraría la normativa internacional sobre derechos humanos.

La acción indemnizatoria tiene por objeto obtener la reparación integral de los perjuicios ocasionados y encuentra su fundamento no sólo en principios generales del derecho internacional de los derechos humanos sino que en normativa internacional ratificada por Chile, así los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos implica que la responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad queda sujeta al derecho internacional.

Dicha normativa internacional no sólo constituye un límite a la soberanía del Estado sino que además condiciona el actuar de sus órganos, conforme a lo preceptuado en los artículos 5° y 6° de la Constitución Política, no pudiendo por tanto hacer prevalecer la normativa interna, en abierta contradicción con el derecho internacional, cuando implica en los hechos la imposibilidad que el Estado cumpla con su deber de reparación integral y de hacer cesar las consecuencias de la violación a los derechos humanos, comprometiendo así su responsabilidad ante la comunidad internacional.

**DÉCIMO SEGUNDO:** Que finalmente y también en carácter de subsidiario la demandada efectúa alegaciones en





cuanto a la existencia del daño y el monto de la indemnización solicitada.

Al respecto cabe señalar que se determinará la existencia del daño y su magnitud conforme al mérito de autos. En lo relativo al monto de la indemnización, de constatarse la existencia de daño, se determinará prudencialmente considerando la magnitud del mismo.

**DÉCIMO TERCERO:** Que descartadas las alegaciones de la demandada, cabe señalar que el actor afirma que producto de los delitos de lesa humanidad de que fue objeto durante su cautiverio sufrió un daño moral.

Al efecto, resulta necesario tener presente que se ha entendido que el daño moral comprende todo detrimento o menoscabo que por hecho o culpa de otro la víctima sufre en sus intereses extrapatrimoniales.

Al respecto don Álvaro Vidal Olivares al tratar el daño corporal como manifestación del daño moral, cita a la profesora Carmen Domínguez Hidalgo, quien refiriéndose al daño moral señala que: "(...) estamos con aquellos que conciben al daño moral del modo más amplio posible, incluyendo allí todo daño a la persona en sí misma "física o psíquica", como todo atentado contra sus intereses extrapatrimoniales."

Asimismo, cita sentencia de la Corte Suprema del año 2014 (Rol N° 12048-2013) que señala, "Que el daño moral se ha entendido como el pesar, dolor, molestia que sufre una persona en su sensibilidad física o en sus sentimientos, creencias o afectos. Si atendemos al concepto, éste abarca no sólo las lesiones a bienes de la personalidad, lo que en estricto rigor constituye daño moral, sino que además quedan comprendidos las lesiones corporales, la aflicción psicológica y la pérdida de oportunidades para disfrutar la vida. De esta manera y considerando la lesión de un interés jurídicamente relevante, se puede llegar a la



compensación del daño no patrimonial no sólo por el dolor o sufrimiento que se padece." ("Responsabilidad Civil Médica", DER Ediciones Limitada, primera edición, octubre de 2018, p. 83).

Esta concepción amplia del daño moral supera el denominado *pretium doloris*, sufrimiento efectivo de la víctima, y comprende aspectos como la pérdida de ventajas de vida, entre las que encontramos sin duda las relaciones de familia, laborales y socio-comunitarias.

**DÉCIMO CUARTO:** Que a fin de acreditar la existencia y magnitud del daño moral invocado, así como su nexos causal con los delitos de lesa humanidad de que fue objeto, el demandante rindió prueba instrumental y testimonial.

En cuanto a la instrumental, aparejó a los autos "Informe de Daños a Consecuencia de Prisión Política, Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes", suscrito por la psicóloga Romina Yáñez Vásquez.

Tal informe señala que se pudo detectar que el demandante padeció durante su prisión tortura física y psicológica. Dicha prisión se extendió desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de enero de 1974, fecha en que es liberado para ser detenido nuevamente ocho meses después a fin de ser sometido a Consejo de Guerra, siendo condenado a relegación en Chiloé y luego conmutada la pena por extrañamiento, saliendo al exilio. Así, entre otros, se constató que sufrió golpes de mano, pies y con armamento, aplicación de electricidad y trabajos forzados. En el ámbito psicológico fue objeto de amenazas de muerte, amenazas de tortura, seguimientos e interrogaciones después de su liberación, hostigamiento constante, privación de poder estar en el funeral de sus padres y privación de poder volver al país luego de haber cumplido la pena de extrañamiento.



En este punto cabe destacar que en el marco de las entrevistas a que dio lugar el informe psicológico, el actor refiere que en su estadía en el Regimiento Pudeto él y otros prisioneros fueron golpeados reiteradamente con fusil en la boca y cara, obligados a estar en posiciones forzadas por horas. Asimismo recuerda haber sido sacado en dos ocasiones a interrogatorio en el "Palacio de la Sonrisa", donde fue desnudado entero para ser colocado en un catre, "La Parrilla", donde le abren las extremidades para ser amarrado, mientras le dicen "Ahí sabrás lo que es bueno, te gusta la revolución marxista, querían matar a medio mundo ustedes", se le pregunta por las armas y nombre de personas, al no decir nada comienza la tortura, le colocan un alambre en su pene y le aplican electricidad, señalando el actor: "(...) no es que te duela ahí, te duele todo, te duele el alma, era una cosa espantosa, es el dolor más grande de tu vida, tu al final quieres que te maten, estuve 3 horas (...)".

Además relata su llegada a Isla Dawson, donde indica que es despojado de su nombre pasando a llamarse "Charlie 50", en referencia al nombre de la barraca donde fue destinado, "Barraca Charlie". Además el demandante hace referencia a los trabajos forzados a que fue sometido en dicho campo de concentración y a la mala calidad de la comida, "la comida era tan mala, nos daban porotos con piedras todos los días, era asqueroso".

En cuanto al impacto que la tortura física y psicológica causó en el actor, el informe señala que desde el ámbito psicológica se ve claramente reflejada en el área ligada a la psicoafectividad, la que se refiere a aspectos emocionales, motivacionales y actitudinales de la persona.

Así se aprecia un impacto en la personalidad, en su autoestima con una gran inseguridad, tal condición



comprometió sus habilidades sociales que le permitían generar lazos importantes para poder desenvolverse en el medio, tales como personales y laborales, siendo esta marcada por una forma de relacionarse ansiosa persecutoria.

Se observa una persona resiliente, sin embargo se aprecia una tendencia a la evitación y anestesia emocional cuando debe tratar temas emocionales propios. Tales mecanismos de defensa se ven comprometidos cada vez que se le vuelve a mencionar el hecho represivo, volviéndose una persona lábil y frágil emocionalmente, lo que es muy común en personas que han sido víctimas de tortura y maltrato físico, psicológico y sexual, por lo que se puede diagnosticar un trastorno de estrés postraumático.

En el ámbito relacional se aprecia una conducta evitativa para establecer nuevos vínculos sociales, con ansiedad persecutoria, manifestando aun sentirse en ocasiones vigilado o con cierta desconfianza hacia quienes son las figuras de las Fuerzas Armadas.

En el ámbito familiar el informe afirma que la vivencia traumática del actor impactó en su vida familiar. Así refiere que al ser detenido, producido el golpe de Estado, su esposa estaba embarazada de su tercer hijo, Fernando, provocándole ansiedad, miedo, terror y preocupación por la incertidumbre de su situación. Si bien la detención no afectó el parto, si generó sensación de inestabilidad, ansiedad e inseguridad.

En cuanto a la relación del actor con sus padres, el hecho represivo le causó mucho dolor, pues al no poder volver al país aun cumpliendo su pena de 5 años de extrañamiento, no pudo volver a ver nunca más a sus padres, pues su padre murió el año 1981 y un año después



su madre, y en ambas ocasiones se le negó el ingreso al país.

En lo referente a sus hijos mayores, si bien al momento de su detención eran pequeños, tal circunstancia provocó en los infantes impacto en su autoestima, capacidad de regularse y seguridad del ambiente, a lo que debe agregarse que al cambiar de país debieron desarrollar habilidades lingüísticas para adaptarse al nuevo ambiente. En cuanto a su hijo menor Fernando al presentarse al Servicio Militar Obligatorio para servir a su Patria fue objeto de burlas por el personal militar al no manejar adecuadamente el castellano, así le decían "que miras maricón" y el no entendía.

En el ámbito laboral perdió su cargo de vicepresidente ejecutivo de la Empresa Magallánica de Turismo, EMATUR, comenzando a tener problemas económicos, no podía encontrar trabajo por su condición de relegado, con graves problemas para mantener su hogar lo que le significó entrar en un cuadro de ansiedad constante, luego al salir al exilio a EE.UU. tuvo que empezar de cero, siendo auxiliar de aseo, estudiando y trabajando hasta lograr obtener una profesión y sacar adelante a su familia.

Finalmente en el ámbito político-social se señala que frente a acciones masivas como protestas y marchas, el actor es resistente a participar debido a sentimientos de desesperanza que le ha ocasionado las injusticias relacionadas a la política. Además la represión sufrida ha generado en él un cambio en la imagen respecto de las Fuerzas Armadas y Carabineros, provocándole remordimiento, sentimientos de rechazo y malestar.

**DÉCIMO QUINTO:** Que en cuanto a la prueba de testigos destaca la declaración de la psicóloga Romina Valentina Yáñez Vásquez, quien evacuó el informe de daños del



actor en el marco del PRAIS, referido en el motivo que precede.

La testigo junto con reconocer el informe que le fue exhibido, reconociendo su firma y contenido, agrega en relación con el daño sufrido por el demandante que se le constató un trastorno del sueño crónico que no se ha podido regular desde que sucedió el hecho represivo. Además se observa en el actor una baja autoestima y sintomatología ansiosa que es fluctuante en el tiempo, lo que se refleja cada vez que vuelve a recordar hechos similares al hecho represivo o cada vez que habla de él específicamente. Asimismo se observa sintomatología evitativa hacia los demás, mucho miedo frente a figuras de las Fuerzas Armadas, lo que somatiza con dolor de estómago, dolores musculares y a veces dolores de cabeza, todo lo cual da cuenta que el actor aun presenta un trastorno de estrés post traumático.

A su turno los testigos Gómez Alba, Vera Velásquez y Rodríguez Uribe son contestes en señalar que a consecuencia de la prisión, tortura y exilio, sin duda se ha causado daño al actor y a su familia.

**DÉCIMO SEXTO:** Que la prueba instrumental y testimonial referida hace plena fe en cuanto a que los tratos crueles e inhumanos que se dan por acreditados,-privación ilegal de libertad, aplicación de electricidad, golpizas, trabajos forzados, entre otros-, cuyos efectos son posibles de evidenciar en el demandante conforme se asevera en el informe del PRAIS aparejado a los autos y la testimonial producida, configura la tortura de que fue objeto el actor, impetrada por agentes del Estado con el sólo propósito de obtener una supuesta información o una confesión,-donde están las armas y nombres de sus compañeros de partido político-, y de castigarlo por el sólo hecho de militar en el Partido Socialista de Chile que participó



en el gobierno de la Unidad Popular derrocado mediante el golpe de Estado, causando en él un daño positivo o efectivo en sus esfera mental, menoscabándolo en su dignidad como ser humano, a tal punto que se le despojó incluso de su nombre cosificándolo con la denominación "Charlie 50".

Dicha aflicción psíquica, que dio origen a un estrés post traumático conforme al informe PRAIS y a la declaración de la profesional que lo evacuó, se extienden hasta la actualidad.

Asimismo, los actos de lesa humanidad de que fue objeto el demandante le produjeron un perjuicio de agrado o perdida de ventajas de vida, en el ámbito social, familiar, laboral y socio-político, como ya se señaló en los motivos que preceden.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que encontrándose acreditado el actuar ilícito del Estado, contrario a la constitución y a las leyes, y el daño que dicho actuar causó al demandante, surge entonces su responsabilidad al tenor de lo previsto en los artículos 6°, 7° y 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República y artículos 4° y 42 de la Ley Orgánica Constitucional Sobre Bases Generales de la Administración del Estado, y artículos 2314 y siguientes del Código Civil, por lo cual se acogerá la demanda.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que en la valuación de los perjuicios, que se fijará en lo resolutive de esta sentencia, se considerará: 1.- la gravedad del daño sufrido por el actor, la que abarcó diversos ámbitos de su vida y se manifiesta en un estrés post traumático vigente hasta nuestros días; 2.- las circunstancias del caso, pues el actor fue víctima de delitos de lesa humanidad, apresado en forma arbitraria, torturado y confinado en circunstancias degradantes para la dignidad humana, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta enero



del año 1974, y luego de aproximadamente de 8 meses de libertad, no exenta de hostigamiento por parte de la dictadura cívico-militar, fue nuevamente apresado ilegalmente para ser sometido a un Consejo de Guerra espurio, luego relegado y exiliado no pudiendo regresar al país por la arbitrariedad del Régimen que ni siquiera respetó los propios fallos pronunciados por los Consejos de Guerra que orquestó, todo ello en el marco de una política represiva del Estado que comprendió la violación sistemática de los DD.HH. de aquellos compatriotas considerados peligrosos para los intereses de la dictadura cívico-militar que detentaba el poder en Chile; y 3.- que la detención, tortura, relegación y exilio de que fue objeto el actor repercutió en el desarrollo de su ciclo vital en el ámbito familiar, laboral, social y político-social.

**DÉCIMO NOVENO:** Que en cuanto a la época que se considerará para el cálculo de reajustes e intereses, considerando exclusivamente que el demandante pidió que se devengaran desde que la sentencia cause ejecutoria, lo que sin duda debe entenderse como ejecutoriada atendido que un eventual recurso de apelación que impugne el mérito de esta sentencia necesariamente debe concederse en ambos efectos, suspensivo y devolutivo, se accederá a tal petición ordenando que la cantidad de dinero que se ordene pagar se reajustará y devengará intereses desde la fecha en que el presente fallo quede ejecutoriado.

**VIGÉSIMO:** Que en lo relativo a las costas diremos que el hecho que el Consejo de Defensa del Estado tenga la obligación de defender judicialmente los intereses del Fisco, conforme lo ordena el artículo 2° de su ley orgánica, no significa que por esa sola circunstancia haya tenido motivos plausibles para litigar, pues la plausibilidad para oponerse a una pretensión





judicializada hay que buscarla en los argumentos vertidos en el respectivo proceso y no en antecedentes que resultan totalmente ajenos al juicio.

Sostener lo contrario implica en los hechos la derogación del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil respecto del Fisco, creando de facto un privilegio procesal en su beneficio que pugna con nuestra legislación, tanto a nivel constitucional como legal, manifestadas en diversas normas que buscan evitar que se discrimine a particulares frente al Fisco. Tal principio queda de manifiesto en el artículo 19 N°2 y 21 de la Constitución Política de la República y a nivel legal se puede citar por vía ejemplar el artículo 2497 del Código Civil.

Finalmente cabe señalar que la propia ley orgánica constitucional del Consejo de Defensa del Estado, manteniendo la debida armonía que debe tener el ordenamiento jurídico, no exime al Fisco del pago de costas, así se desprende de su artículo 64 que en lo pertinente señala que no será aplicable a los funcionarios del Consejo de Defensa del Estado lo dispuesto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, es decir, los procuradores judiciales no responderán con su patrimonio personal de las costas procesales que son de cargo del Fisco de Chile. A contrario sensu resulta claro entonces que puede condenarse a la persona jurídica de derecho público Estado-Fisco de Chile al pago de costas, no obstante la obligación legal del Consejo de defender judicialmente sus intereses.

Así las cosas, considerando que la demandada ha resultado totalmente vencida y estimando del mérito del proceso que no ha tenido motivos plausibles para litigar, -la negación de la legitimación activa del



demandante por el sólo hecho de no figurar en una lista de presos políticos no encuentra mayor sustento jurídico y la prescripción de la acción civil son argumentos que reiteradamente han sido rechazados por los tribunales de justicia-, será condenada al pago de las costas generadas por el presente juicio.

Y considerando además lo prescrito en los artículos 5°, 19 N° 1 de la Constitución Política de la República; artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 14.1 de la Convención sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes; artículo 1.1, 2 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículos 144, 159, 160, 161, 162, 170, 253 y siguientes y 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **SE RESUELVE:**

**I.-** Que **SE RECHAZA** la excepción de prescripción extintiva intentada por el Fisco de Chile.

**II.-** Que **SE ACOGE** la demanda de indemnización de perjuicios deducida por el abogado Pablo Andrés Bussenius Cornejo, en representación de don **ALEJANDRO CONSTANTINO FERRER FERNANDEZ**, en contra del **ESTADO DE CHILE**, representado por el abogado procurador fiscal de Magallanes don Claudio Patricio Benavides Castillo.

En consecuencia, se **CONDENA** al **ESTADO DE CHILE** a pagar a la parte demandante, por concepto de indemnización de daño moral, la suma de **\$150.000.000.-**.

**III.-** Que la suma de dinero que se ordena pagar será reajustada conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor y devengará intereses corrientes, desde la fecha en que la presente sentencia quede ejecutoriada.

**III.-** Que se **CONDENA** a la demandada a pagar las costas de la causa por haber sido totalmente vencida.



Regístrese, notifíquese, consúltese si no se  
apelare y archívese en su oportunidad.

**Rol N° C-1810-2022.**

**DICTÓ DON CLAUDIO NECULMÁN MUÑOZ, JUEZ TITULAR DEL  
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE PUNTA ARENAS.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo  
dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en  
**Punta Arenas, siete de Diciembre de dos mil veintitrés**

